

23ª SESION ORDINARIA DEL 28 DE JULIO DE 1886

Presidencia del Dr. Serú

SUMARIO—Asuntos entrados—Continúa la discusion pendiente sobre el dictamen de la comision de códigos en el proyecto de ley, en revision, modificando la ley orgánica de los tribunales de la capital, (art. 71, recursos de fuerza.)

<p>PRESENTES</p> <p>—</p> <p>Presidente Albarracin Alcorta Arauz Araujo Avellaneda Barra Berdia Bermajo Bruchmann Bustillos Cáceres Calvo Calderon Carballido Cano Carbonell Castro Colombres Coquet Corvalán Craspo Espinosa Estrada Fernandez Figueroa (F. J.) Figueroa (M. A.) Gallo Garcia Gil Gomez Goyena Huidobro Lainez Laurencena Leguizamon Lubary Luro Malbrán</p>	<p>—En Buenos Aires, á 28 de julio de 1886, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados inscriptos al márgen, el señor presidente declara abierta la sesion, siendo las 2 y 30 p. m.</p> <p style="text-align: center;">ACTA</p> <p>Se lee y aprueba, sin observacion, la de la sesion anterior.</p> <p style="text-align: center;">ASUNTOS ENTRADOS</p> <p>DESPACHO DE LAS COMISIONES</p> <p>—La de guerra y marina se ha espedido en el proyecto del señor diputado Gomez, referente á la adquisicion del «Atlas histórico topográfico de la guerra del Paraguay.»</p> <p>—La de peticiones, en la solicitud de don Juan Gutierrez, sobre subvencion á un conservatorio de música y declamacion.</p> <p style="text-align: center;">PETICIONES PARTICULARES</p> <p>—El sargento mayor de la armada, Bernardino Prieto, solicita el pago de haberes devenidos.</p> <p>(A la comision auxiliar de presupuesto.)</p> <p style="text-align: center;">PROYECTO DE LEY</p> <p>El senado y cámara de diputados, etc. etc.</p> <p>Art. 1º El poder ejecutivo procederá á construir inmediatamente y en la forma que esti-</p>	<p>Mansilla Morán Olmedo Padilla Paz Portela Pino Posse Roca Rodriguez Ruiz Ruiz de los Llanos Sold Solari Soler Sosa Tagle Villamayor Villagra Yofre Yramain Zavalla Zorrilla</p> <p style="text-align: center;">AUSENTES</p> <p style="text-align: center;">CON LICENCIA</p> <p>Demaria Ocampo Terán Videla</p> <p style="text-align: center;">CON AVISO</p> <p>Acosta Augier Cabeza Civit Gerostiaga Leloir Viso</p> <p style="text-align: center;">Sin aviso</p>	<p>me mas ventajosa, las obras de desviacion parcial del río Dulce, conforme á los estudios y planos formulados por el departamento nacional de ingenieros.</p> <p>Art. 2º El gasto que demande la ejecucion de la presente ley no excederá de 200,000 pesos, y será cubierto de rentas generales, imputándose á la misma.</p> <p>Art. 3º Comuníquese al poder ejecutivo.</p> <p>Julio 28 de 1886.</p> <p style="text-align: right;">O. Carbonell.</p> <p>Sr. Carbonell—Pido la palabra.</p> <p>Como se vé, no es nueva la idea que tengo el honor de someter á la consideracion de la cámara.</p> <p>Obedeciendo á las mismas tendencias, en 1882, el entonces diputado Rojas presentó á la cámara un proyecto disponiendo se practicara los estudios de las desviaciones total y parcial del río Dulce.</p> <p>Posteriormente, si mal no recuerdo en las sesiones del año pasado, otro señor diputado presentó un proyecto mas ó ménos análogo al anterior, que respondía á satisfacer las mismas necesidades.</p> <p>Esos asuntos siguieron el trámite ordinario, es decir, pasaron al dictámen de la comision de obras públicas, la que se espidió aconsejando la aprobacion del primero.</p>
--	--	---	--

Dantas
Pujol Vedoya
Riquelme
Vidal
Torvent
Zaballos
Serú

Como resultado de estos trabajos preliminares, el departamento de ingenieros de la nacion practicó los estudios simultáneos de las dos desviaciones, la una parcial y la otra total.

La última, es decir la desviacion total que exige un desembolso al erario público de cuatrocientos y tantos mil pesos, si mal no recuerdo, es la que ha dado origen al proyecto presentado, en la sesion anterior, por el señor diputado Lainez.

La otra, es decir la desviacion parcial, solo exige un gasto de ciento noventa y tantos mil pesos.

Yo, señor presidente, consultando la situacion económica del país, á la vez que tomando en consideracion lo mas práctico y factible, me he decidido á presentar este proyecto que dispone se mande ejecutar los trabajos de acuerdo con aquellos estudios que el departamento de ingenieros ha practicado, correspondientes á la desviacion parcial del rio Dulce.

Es obedeciendo á estos propósitos que someto á la consideracion de la cámara el proyecto que acaba de leerse, y creo que si él merece la sancion de ésta, serán grandes é inapreciables los beneficios que se lleve á todos los departamentos situados al sud de la provincia de Santiago, y que tanto necesitan del agua, para producir con arreglo á sus necesidades locales.

Creo, así mismo, que el proyecto presentado evita que produciéndose la desviacion total del rio Dulce, se opere la depreciacion de las propiedades situadas abajo de donde debe partir la desviacion.

Espero, señor presidente, que, en mérito de las consideraciones espuestas, mereceré el apoyo de mis distinguidos colegas, en favor del proyecto.

He dicho.

—Suficientemente apoyado, se destina á la comision de obras públicas.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Art. 1º El poder ejecutivo mandará practicar los estudios de una línea férrea que, partiendo de la estacion Chumbicha, en Catamarca, termine en Tinogasta, pasando por los pueblos de Alpachiche, Cerro Negro, Rio Colorado y aproximándose á las poblaciones de Machigasta é Himogasta.

Art. 2º Del punto mas conveniente en esa línea, se hará tambien el estudio de un ramal férreo

al fuerte de Andalgalá, aproximándose por los pueblos de Poman y Sangil.

Art. 3º Los estudios y proyectos completos de esas líneas serán elevados al honorable congreso en las primeras sesiones del próximo período legislativo.

Art. 4º Queda autorizado el poder ejecutivo para invertir en la ejecucion de esta ley hasta la cantidad de quince mil pesos (ps. 15.000), debiendo imputarse á la misma.

Art. 5º Comuníquese, etc.

Uladielao Auguier — Fidel Castro
— Márcos A. Figueroa — Antonio del Pino — Juan J. Iramain — Manuel Solá.

Sr. Castro—Pido la palabra.

Aunque este proyecto se presenta apoyado por el número de firmas requerido segun el reglamento, me voy á permitir, sin embargo, aducir algunas consideraciones, por lo que pudieran ellas influir en el ánimo de la comision, para dar un despacho favorable.

El ferro-carril de Recreo á Chumbicha no responde á las altas miras que el congreso tuvo al sancionarlo, ni produce renta bastante para indemnizar los gastos que demanda su explotacion. Prolongado á Catamarca y á la Rioja, como está ordenado, ya producirá ventajas, dará renta tambien, pero no en cantidad bastante para alimentar el ferro-carril.

El proyecto presentado viene á llenar esta deficiencia, puesto que autoriza los estudios para construir un ferro-carril que vá á pasar por centros poblados, de gran importancia en el presente y en el porvenir.

El silbato de la locomotora, señor presidente, por esta vía no irá á perderse estérilmente en los desiertos, como en otras partes; irá á despertar á los pobladores de ese letargo secular, diré, de esa inactividad en que yacen, dándoles un elemento de vida, con mas los estímulos nobles de trabajo que vivifica y eleva al hombre sobre sí mismo.

Los departamentos de Tinogasta y Andalgalá son importantes por su poblacion, por su riqueza, por su comercio, y, mas que todo, señor presidente, por los elementos de riqueza que concentran en sí la fertilidad del terreno y la abundancia de los minerales que encierran.

Es sabido de todos mis honorables colegas que, desde hace treinta años, se explota minas de cobre en el departamento de Andalgalá, cuyos productos se mandan á la Europa. El oro que se estrae del cobre basta y sobra para costear todos los gastos de trasporte desde el fuerte de Andalgalá á Europa.

En cuanto á la otra industria, que es la agricultura, para la que se prestan estos dos departamentos con preferencia á cualquiera otro punto de la república, por la naturaleza del terreno y por otras varias circunstancias que omito, diré que se fabrica en este momento, en el fuerte de Andalgalá, veinte mil barriles de vino. En este año, señor presidente, se ha vendido la arroba de mosto á setenta centavos.

Y si ha podido hacerse esta producción, venciendo toda clase de obstáculos, luchando con la naturaleza por todas partes, sin tener salidas fáciles, ¿qué no será cuando se le abra vías de comunicación para que pueda salir á los centros comerciales de la república?

Pero el proyecto abarca otra idea que inicia ya un pensamiento, trascendental y fecundo, en el porvenir.

En el año setenta y tantos, el gobierno de Chile mostró interés en que el ferro-carril Trasandino viniese á Tinogasta, tanto que se decretó los estudios en aquella parte, y se comisionó á un ingeniero para que los hiciera.

El resultado fué satisfactorio; pero el ferro-carril no se hizo.

Chile tiene ya su ferro-carril tocando la cordillera de los Andes; y si nosotros llegamos á Tinogasta, la tocaremos también por este lado; y entonces dos locomotoras irán, con un pequeño esfuerzo, á darse un abrazo fraternal en la cima de los Andes, estrechando las relaciones comerciales, que son necesarias para la vida de los pueblos.

Volviendo al norte, el ferro-carril de Andalgalá es el comienzo también de otro gran ferro carril que deberá realizarse en un tiempo no muy remoto: el ferro-carril de Andalgalá á Santa María, á los valles Calchaquies, que son el corazón de la provincia de Salta, los pueblos mas importantes de ella; y de allí irá hasta la Quebrada del Toro, por donde le quedará espedito el camino para que marche á Bolivia, abriendo ese mercado á las producciones argentinas.

No me extenderé en mayores consideraciones, y me reservaré hacerlo cuando venga el proyecto á la discusión de la cámara, si es que merece ese honor.

Espero que así sea, porque lo que se pide es una cantidad insignificante, mientras que el resultado que se va á obtener por esta ley, es de consecuencias trascendentales.

Estoy seguro que, una vez hechos los estudios, levantando el plano, y todo lo demás, no tendrá el gobierno nacional que gastar, para proceder á la construcción de esta línea, porque habrá una ó diez empresas particulares que se harán cargo de la obra si se les entrega, pues esta línea ofrece

esta ventaja, que ninguna otra de las que se está construyendo presenta: que en el momento en que la locomotora haya llegado á los primeros kilómetros, ya tendrá mercancías para trasportar. Es decir que el resultado será mas próximo, mas espeditivo, y no podrá emplearse con mejor resultado los capitales.

— Apoyado suficientemente el proyecto, se destina á la comision de obras públicas.

ORDEN DEL DIA

• ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

Sr. Presidente—No hay mas asuntos entrados.

De acuerdo con la resolución de la cámara, se considerará el artículo 71 de la ley orgánica de los tribunales de la capital, cuya discusión quedó pendiente.

Sr. Colombres—Pido la palabra.

No voy, señor presidente, á contradecir fundamentalmente las ideas vertidas en la sesión del viernes último, por mi honorable colega el señor diputado por Buenos Aires, cuya ciencia y sinceridad de convicciones respeto profundamente.

Pero mi posición en este debate, como miembro informante de la comisión de códigos, me impone el deber de hablar, para manifestar, siquiera ligeramente las razones que han inducido á aquella á no modificar la sanción del honorable senado en el punto que se discute, y que la deciden á insistir en lo aconsejado desde el principio.

Para mí, señor presidente, los recursos de fuerza constituyen una simple cuestión de derecho público, que debemos estudiar sin espíritu prevenido, fría y razonadamente, apartándonos en lo posible del debate apasionado, solo conducente á afectar creencias y sentimientos sanos y sinceros, y por eso mismo acreedores á la mayor consideración.

Tampoco voy á entrar á lo que podría considerarse el fondo del asunto, á hacer la filosofía y la historia de los recursos de fuerza.

Se trata, felizmente, de una cuestión esencialmente estudiada ya en nuestro parlamento.

Son del dominio general las razones aducidas en pró y en contra, y no haría sino repetir pálidamente lo que en esta misma cámara se espuso con elocuencia y brillos en 1881, si me propusiera salir del programa modesto que me he trazado en proporción á mis fuerzas.

Mi propósito se reduce, pues, á justificar

la insistencia de la comision de códigos, y voy en derechura á mi objetivo.

Desde luego, señor presidente, de los tres recursos que, segun opinion general de los tratadistas, constituyen lo que se llama recursos de fuerza, hay uno que, por lo ménos, es colocado en una situacion escepcional, lo mismo por los que lo impugnan como por los que lo sostienen. Me refiero al recurso por conocer, que tiene lugar cuando la autoridad eclesiástica se avoca el conocimiento de un asunto extraño á su jurisdiccion.

Respecto de los otros dos, sobre el modo de conocer y por no otorgar, se arguye que ellos encuentran su correctivo dentro de los tribunales eclesiásticos mismos. Y así se dice: cuando un juez procede con manifiesta violacion de las leyes de forma, ó cuando niega indebidamente una apelacion, hay el medio de enderezar el asunto, sin necesidad de salir del radio eclesiástico, sin necesidad de ir á pedir el auxilio del poder civil.

Pero cuando nose trata de estos recursos, sinó del de conocer, entónces todos conocen que hay una verdadera colision, una formal contienda de competencia entre tribunales pertenecientes á diferentes potestades, contienda que debe ser dirimida por un álguien superior, porque no es posible mantener en la incertidumbre los derechos que se ventilan.

Pero ¿quién será el árbitro en una cuestion semejante?

Esta es la dificultad.

Recuerdo, señor presidente, que cuando, en 1881, se discutía en la cámara este mismo punto, el señor diputado por Buenos Aires, doctor Goyena, apoyándose en la autorizada opinion del práctico español señor Caravantes, decia: «Cuando se trata de un desacuerdo entre jurisdicciones de diversa clase, no hay otro medio congruente con la justicia, para resolver el conflicto, que la intervencion de un tribunal superior á las dos partes, que reuna el carácter del uno y del otro. Esta es la doctrina que la mayor parte de los tratadistas modernos sostienen como aceptable para resolver la dificultad; proponen la creacion de un tribunal eclesiástico y civil.»

Ahora bien, señor presidente; sin entrar á discutir el punto, ni la practicabilidad de este sistema, es evidente que, para realizar esto que se nos presenta como la única solucion, sería menester la celebracion de un concordato con la Santa Sede, que diera existencia y forma á este tribunal misto.

Y yo pregunto: mientras esto no tenga lugar, mientras nos encontremos en la situacion actual, ¿es posible sostener que producido el conflicto, que suscitada la contienda

de competencia, debamos encontrarnos delante de un verdadero nudo gordiano, que no permita hallar una solucion para el punto que motive la contienda?

No creo que haya quien se atreva á sostener una tesis semejante.

Y si álguien debe poner término á la dificultad, si álguien debe entender en la emergencia, yo pregunto: ¿quién otro puede ser sinó el poder civil, que al fin tiene mision tutelar sobre todos, y no solamente sobre determinadas personas congregadas por la comunión de su fe?

Se vé, pues, que el recurso de fuerza fluye, en estos casos, como una necesidad imperiosa.

Y aquí, señor presidente, debo explicar á la cámara por qué atribuimos la facultad de entender en estos recursos, á la cámara de lo civil.

Es sabido que, por la constitucion de 1853, se atribufa á la suprema corte de justicia de la nacion la facultad de entender en los recursos de fuerza, y que esta facultad le fué quitada por la convencion reformadora de 1860.

Entónces se dijo que, por la naturaleza de los asuntos que dan margen á un recurso de fuerza, asuntos puramente civiles por lo general, no á la corte federal, sinó á los tribunales provinciales, era á quienes debía corresponder su juzgamiento; y quedó entónces establecida, como una facultad de cada provincia, la de designar el tribunal que debía entender en esos recursos.

De ahí que, desde entónces, las constituciones provinciales, casi en su totalidad, atribuyen la facultad de entender en los recursos de fuerza á sus respectivas cortes supremas; y como la cámara de lo civil, en la capital de la república, hace las veces de una corte suprema provincial, á ella se ha atribuido esta facultad desde que se organizaron por primera vez los tribunales locales.

La comision no ha hecho, pues, otra cosa que ratificar lo que ha encontrado establecido incontrovertiblemente aquí, como en todas las demas provincias argentinas.

Me he contraído esclusivamente, en mi razonamiento, al recurso *por conocer*, porque para el fin que se propone la comision basta que haya un caso en que el recurso de fuerza resulte incuestionable, para que se atribuya á álguien la facultad de entender en él.

A juicio de la comision, en una ley como la que se discute, de simple organizacion de los tribunales, no puede hacerse otra cosa que conceder los recursos *in genere*, dejando la especificacion de los casos en que han de ser procedentes, como los medios de hacerse efectivos, para una ley mas vasta, mas

fundamental, como sería un código de procedimientos civiles.

Es por esta razón que mi honorable colega el señor doctor Gil, que había manifestado que podía ó debía hacerse cierta distinción, sin embargo está ahora de perfecto acuerdo con la comisión en que se mantenga la redacción del artículo tal como está, porque eso no excluye que se haga esa distinción mas tarde, si, al discutirse el código de procedimientos, la cámara juzgare conveniente hacerla.

Tales son las ideas que han prevalecido en el seno de la comisión sobre el punto que actualmente se discute y que he sido encargado de poner en conocimiento de la cámara.

Sr. Estrada--Pido la palabra.

Habiendo declarado el señor miembro informante de la comisión de códigos, su resolución de no entrar en lo fundamental de la cuestión que está á la consideración de la cámara, me encuentro en la imposibilidad de dar mayor desenvolvimiento á las ideas que tuve el honor de someter á su juicio, en la sesión del viernes pasado.

Me limitaré, por consiguiente, á observar que, no obstante las reglas de método á que se ha subordinado la comisión en su exposición, el proyecto tiene todo el radicalismo, digámoslo así, de que carece el informe del señor diputado por Tucuman que deja la palabra.

Para insistir en el consejo que primitivamente presentó á la cámara, dá por fuera de cuestión la necesidad de restablecer uno de los recursos de fuerza, el llamado recurso de *fuerza en conocer*, y es precisamente este el que mas fundamental y directamente ataca los principios y derechos en virtud de los cuales hice objeción al artículo.

El señor diputado ha dicho que pueden sobrevenir conflictos de competencia entre los tribunales civiles y los tribunales eclesiásticos, y que, dados esos conflictos, es absolutamente necesario buscar una autoridad competente para resolverlos. Y ha dado por sentado que esta facultad debe corresponder á los tribunales civiles, que es lo mismo que dar por sentada esta otra doctrina: la de la superioridad de la soberanía civil sobre la soberanía de la Iglesia.

Precisamente, en virtud del principio contrario, la Iglesia ha protestado continuamente, á través de todos los siglos, contra los gobiernos que han adelantado esta doctrina; precisamente en virtud del principio contrario, me opuse á la sanción de este inciso.

La comisión ha entendido que no hay nada que modificar en su despacho. Yo nada tengo tampoco que modificar en mis ideas,

y nada fundamental que añadir, en tanto no se aduzcan nuevas razones.

Sr. Goyena—Pido la palabra.

No puedo votar en silencio contra el artículo que propone la comisión y sobre el cual vuelve en los términos que el señor miembro informante acaba de manifestar.

Me coloco en la misma situación en que me coloqué cuando, ocupando en años anteriores un asiento en esta misma cámara, se presentó por primera vez el proyecto relativo á los tribunales de justicia de la capital. Entendía y entiendo que no es lícito á un católico, guardar silencio, mucho menos concurrir con su voto, cuando se trata de la sanción de una cláusula legal que afecta fundamentalmente la independencia de la Iglesia. Por eso me opondré siempre á que en las leyes, á cuya discusión asista, se consigne en una cláusula ú otra la doctrina á que responde el inciso en discusión.

Admitir la Iglesia como ella es, como una sociedad perfecta con todos los medios necesarios á la consecución de su fin, reconocerla como tal Iglesia, derivada de un origen divino, importa en buena lógica, importa en sana jurisprudencia, admitirla con aquella vida externa y con aquel conjunto de instrumentos legales para que esa misión sea realizada.

No se concebirla, no se concibe, la Iglesia como una entidad así definida, si ella no ha de tener los tribunales necesarios para administrar justicia y para hacer efectivas, en la vida real, las disposiciones que forman su legislación.

Los recursos de fuerza, en cualquiera de los tres casos en que los prácticos los dividen afectan esa independencia, son violatorios de la sana doctrina jurídica. Cualquiera de esos tres casos importa una violación manifiesta de los principios elementales del procedimiento.

Si consideramos el recurso que se emplea bajo la denominación «de no otorgar,» nos encontramos con una situación jurídica en que un juez de jurisdicción completamente estraña á aquella á que corresponde el asunto, interviene para hacer que un óbice, una obstrucción legal, como es la negativa del recurso, sea suprimida; para cohibir al juez que legítimamente está conociendo en el asunto, y ponerle en el caso de conceder un recurso que él entiende ser improcedente.

Cuando se trata del recurso en el caso denominado «por el modo de proceder,» tenemos también un juez civil interviniendo en el procedimiento eclesiástico para cohibir al juez competente en el asunto y ponerlo en el caso de aplicar los cánones, de aplicar las leyes de procedimiento eclesiásticas en

una forma que este juez, en su conciencia, entiende no ser la pertinente.

Cuando por fin se trata del recurso bajo la denominacion «por conocer,» tenemos que una cuestion de competencia entre dos órdenes de jurisdiccion es dirimida por uno de los elementos que representa exclusivamente una de esas jurisdicciones, contra el principio elemental de que la autoridad superior es la única que puede derimir competencias.

Señor: considerando estos recursos en general, ellos no resisten al análisis, ni del punto de vista de la doctrina, ni aun del punto de vista histórico.

Bajo el punto de vista de la doctrina no podría justificarse un procedimiento con arreglo al cual se llega á extremos en que, en vez de seguir, segun la legislacion universal, el recurso de apelacion del grado inferior al grado superior, resulta que una disposicion de la curia metropolitana es enmendada, es trabada, es reducida á la nada en la práctica, por una cámara de apelacion de la capital, por un tribunal civil que no está en grado gerárquico superior á esa curia: mas todavia, violándose en ese caso otro principio elemental en materia de procedimiento; porque si es evidente que la apelacion vá de grado inferior á grado superior, es evidente tambien que la apelacion, segun la legislacion de los países cultos, se produce en el mismo orden de jurisdiccion. Una causa que pertenece á la jurisdiccion civil se apela de lo civil á lo civil; una causa comercial, del juez de comercio al tribunal de lo mercantil en grado superior; lo mismo en las causas criminales; y aquí la apelacion es del juez eclesiástico al juez civil.

Algo mas; ¿qué garantía de mayor acierto, qué garantía de mayor competencia, pueden ofrecer los jueces civiles para resolver en materias regidas por la legislacion eclesiástica? Y tomando aun prácticamente las cosas, como en estos tiempos no solamente en nuestro país sino en casi todos se producen, ¿qué preparacion especial, qué conocimiento tienen, por una dedicacion esmerada al estudio de estas materias, nuestros magistrados, aun los mas distinguidos bajo otros respectos?

Es sabido que no se dá hoy á la materia de derecho canónico aquella dedicacion, aquella importancia, en los estudios, que se le daba en otros tiempos; y sobre la desventaja de ser este un juez civil, se tiene que considerar la circunstancia de que es mas incompetente que lo que en otros tiempos podía y debía suponerse.

Otro principio de legislacion universal es que la interpretacion de las leyes, para tener

garantías de acierto, debe ser hecha por la misma autoridad de donde emanan.

La autoridad que dicta esas disposiciones es la que se halla en aptitud para interpretarlas.

Si consideramos la cuestion del punto de vista histórico, nos encontramos con que la Iglesia y la sociedad civil han vivido sin semejante recurso, sin semejante procedimiento violatorio de la mas sana doctrina y de los principios de la legislacion universal, desde el origen del cristianismo hasta el siglo XV en Francia, y hasta el siglo XVI en España, como acertadamente se dijo en la sesion del viernes.

Sería curioso que en la vida de ambas sociedades hubiera faltado este resorte que en la autoridad civil se supone indispensable para el funcionamiento de ambas sociedades, para su marcha simultánea, y que hubiese faltado un adminículo jurídico de esta importancia desde la fundacion de la Iglesia por Jesucristo, hasta Carlos V.

La vida de la iglesia muestra, la vida civil muestra, que tanto la Iglesia como el Estado han marchado sin necesidad de hacer estas apelaciones, de sostener doctrinas que afectan fundamentalmente la independencia de la Iglesia.

En los primeros tiempos, cuando la persecucion al cristianismo se realizaba con todos sus horrores, la Iglesia ejercía su jurisdiccion espiritual sobre sus fieles, como ejercía tambien la jurisdiccion temporal; los pleitos se fallaban por la autoridad eclesiástica iban á ella todos los miembros de la Iglesia, á recibir la sentencia, el fallo dictado en justicia y en equidad.

Se establece la paz en tiempo de Constantino, se declara este emperador el protector de la Iglesia, y entónces empieza á aplicarse el único medio que la Iglesia ha admitido y puede admitir en lo sucesivo, porque ella no cambia nada en lo que es fundamental, y en las concordias, los arreglos, las concesiones hechas al poder civil, sin afectar en nada los derechos de la Iglesia para la administracion de la justicia en las causas que ocurren, segun su índole y segun las circunstancias.

Así vemos que bajo todos los emperadores cristianos, y singularmente en las «Novelas» de Justiniano, se declara las razones que sirven de base á esta manera concorde de proceder, evitando conflictos entre la Iglesia y la potestad civil, entre la Iglesia y el Estado. Y sin embargo, despues de tantos siglos, es motivo todavia de estudios serios y de admiracion la sabiduría de las disposiciones contenidas en esas constituciones imperiales.

Si un delito eclesiástico se comete, si hay

actos que puedan afectar en alguna manera los derechos de la Iglesia, juzga el obispo el tribunal eclesiástico, porque las condiciones de acierto están en eso, aplicándose las leyes canónicas, dice Justiniano, á las cuales no desdientan conformarse las vuestras, porque representan la verdad y la justicia.

Viene la edad média, viene la invasion de los bárbaros; se producen los grandes conflictos que agitan á la Europa, y la Iglesia se encuentra como en los primeros tiempos, tal cual se encontraba cuando recién la fundó Jesu Cristo.

Y ¿qué sucedió entónces?

Ella, volviendo á su manera de proceder primitiva, atendiendo á todos los intereses de sus fieles en su propaganda apostólica, llamó á sí y consiguió hacer entrar en el seno del cristianismo á esos mismos bárbaros: y una vez que los bárbaros se hicieron cristianos, encontramos en el derecho de esa época disposiciones análogas á las que imperaron en el tiempo de Constantino, fundador de la paz hecha con la Iglesia.

Y recién en el siglo XV, por argucias de un espíritu legalista y estrecho, se levantan los parlamentos, que por administrar la justicia civil se creen infalibles y su espíritu trasciende á las épocas mas cercanas, se empieza á poner óbice á la aplicacion de las sentencias de los jueces eclesiásticos se empieza á no contentarse con la apelacion al Papa y á querer que los reyes intervengan para trabar la justicia de los tribunales eclesiásticos.

De ahí es que ha surgido el recurso de fuerza.

La Iglesia no lo ha admitido, y hemos presenciado este hecho curioso, esta gran inconsecuencia, como otras que la historia nos ofrece: que los poderes establecidos en reemplazo de aquellos reyes absolutos, de aquellos reyes que siguieron el consejo de juristas estrechos y mal intencionados, diciéndose inspirados por el espíritu más amplio de libertad y de franquicia respecto de todos los elementos que constituyen la sociedad, han hecho un título de gloria del hecho de ser los herederos y representantes de esa tendencia contraria á los derechos y á la independencia de la Iglesia.

No hay ni siquiera el pretexto de decir que faltan medios, y que se ocurre al recurso de fuerza para subvenir á las dificultades que se producen; no se puede decir que faltan medios para que la justicia se administre en los casos concurrentes. No, señor!

¿Qué no hay acaso, una jurisdiccion eclesiástica, con tribunales organizados en su grado gerárquico, con todas las garantías necesarias para la expedicion de los asuntos? ¿Acaso no tiene la Iglesia un gefe superior al

cual, agotados todos los recursos, pueden ir los fieles desde cualquier estremo de la tierra á llevar su queja, jefe que ofrece las garantías mas grandes de acierto y de perfecto espíritu de amor á la justicia?

Y tan luego en nuestro tiempo, cuando hay en el concepto mismo de los hombres de estado ménos afectos á la Iglesia, incomparable justicia, altura en sus resoluciones; precisamente cuando los publicistas mas opuestos á la difusion del catolicismo no pueden ménos que confesar la gran cordura, la prudencia aliada á la firmeza del Pontífice que dirige la Iglesia, se cree encontrar la oportunidad para chicanear á la Iglesia, representada en sus tribunales, la aplicacion de las leyes canónicas.

Franicamente declaro que no me esplico esta anomalía.

Si hay garantías positivas, si hay un recurso verdadero para llegar al logro de una pretension legítima, ellas están en los tribunales eclesiásticos. Y la nacion argentina donde están organizados y reconocidos, no me parece que sienta, en parte alguna, ninguno de esos estímulos, de esos impulsos de la opinion que pongan al congreso en el caso de buscar garantías: ellas son innecesarias, al mismo tiempo que violatorias de los derechos y de los intereses de los argentinos, de la Iglesia de los argentinos, que es la Iglesia católica.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Señor presidente: Vengo, como se infiere, á manifestar la opinion del poder ejecutivo sobre esta cuestion.

No es para el poder ejecutivo, y creo que tampoco lo es para el congreso ni para el pueblo, la cuestion que se debate, una cuestion de mera jurisdiccion de los tribunales, es una cuestion que afecta grandes intereses y derechos de los ciudadanos.

Creo que todos los hombres que han manejado con mayor ó menor estension los asuntos públicos están en el caso de poder afrontar esta cuestion, que no es por cierto difícil.

Son competentes para afrontarla todos los señores diputados y hasta los que no están versados especialmente en asuntos teológicos. Es una cuestion de relacion entre la Iglesia y el Estado, en que quedan afectados los derechos del ciudadano garantidos por el poder civil.

Por esto no parecerá extraño á la cámara que, sin tener un título especial que me habilite ó que sea la muestra de que yo deba creerme competente, venga á tomar la palabra. Ya digo, esta es una cuestion que está al alcance de todo el mundo y que es sencilla, en mi opinion.

Se trata de saber, por los que ponen en discusion estas materias, si ha de haber en la república argentina tribunales *sui generis*, tribunales en los cuales comience y concluya un asunto, llevándose ese asunto de un modo especialísimo, es decir, por los medios que los tribunales eclesiásticos emplean para dilucidar las cuestiones que le son sometidas.

Los legisladores y los que se han ocupado de las relaciones entre los tribunales eclesiásticos y los civiles, han dividido esta cuestion en tres puntos: «derecho de conocer», segun los términos clásicos, «modo de conocer» y «derecho de otorgar ó no otorgar.»

Estos son los nombres técnicos de la materia. Traduciéndolos al language vulgar, quieren decir; facultad de poder negar á un tribunal su competencia para intervenir en una materia; facultad para reclamar acerca de su modo de intervenir en la materia, es decir, su procedimiento; y esta otra categoria: de otorgar ó no la apelacion.

En mi entender, esta cuestion podría ser dividida solamente en dos categorias, porque si nos fijamos bien, el no otorgar ú otorgar la apelacion es una forma del procedimiento, nada mas. Pero ya que los jurisconsultos han creido conveniente hacer esa division, quizá para facilitar el estudio ó la esposicion, y ya que ella no afecta fundamentalmente á nada, podemos conservarla y estudiar el punto que nos toca resolver, teniéndola á la vista.

Desde luego, señor presidente, veo con extrañeza que se viene á hacer cuestion sobre esto que hace muchísimos siglos está en la legislacion de todo el mundo.

Por lo que hace á la América, está en su legislacion desde la conquista, desde el descubrimiento, desde hace mas de tres siglos. Por lo que hace al resto de las naciones cristianas en donde ha habido poder temporal mas ó menos civilizado, está en las leyes desde tiempo inmemorial: no recordándose la época precisa,—al ménos yo no he visto noticia alguna en lo que he consultado,—en que todos estos recursos principiaron á figurar en la legislacion de los diversos países.

Es caso, pues, de preguntarse: ¿Por qué se viene ahora á hacer una cuestion respecto á un punto que, á estar á los antecedentes que existen entre nosotros mismos, debe ser ya completamente conocida?

Creo que en el año 80, cuando se trató de esta ley en el congreso, el punto fué tocado, aunque no con detencion; y el congreso manifestó entónces su decidida opinion acerca de él, estableciendo el recurso de fuerza, en la ley.

Los antecedentes, pues, respecto á la república argentina son mas bien á propósito

para confirmar á todos en la opinion de que este derecho debe subsistir en la legislacion nacional.

Pero ocurre preguntar: ¿porque es que en todos los países cristianos hay este recurso de fuerza sostenido por la autoridad temporal, aunque rechazado por la autoridad espiritual? ¿Qué motivos han tenido los gobiernos—sea dicho: los pueblos—para mantener esto en su legislacion?

Deben haber sido algunos motivos muy fundamentales, cuando se insiste á pesar de todas las controversias, á pesar del inmenso poder que ha tenido la Iglesia en diversas épocas; debe haber prevalecido alguna razon fundamental para que tal recurso se haya conservado.

¿Cuál será esa razon? Será, supongo yo, la misma que encuentro en los estados modernos. Ella debe haber figurado entre los grandes motivos para que se hiciera tantos esfuerzos por mantener en el derecho civil esta prescripcion.

Y en los estados modernos ¿cuál es esa razon? Es la obligacion en que se hallan los poderes públicos de proteger á los individuos y á las familias en asuntos que pueden llevarles ante los tribunales eclesiásticos. Es una proteccion del Estado en favor de los individuos.

Pero ¿tiene razon de ser esta proteccion?

El señor diputado que deja la palabra ha encomiado los procedimientos de los tribunales eclesiásticos y ha dicho que en ninguna parte pueden tener los ciudadanos mayores garantías que ante dichos tribunales.

Quiero conceder que la afirmacion del señor diputado sea exacta. Pero para la teoria jurídica esa afirmacion no es bastante, y cuando se trata de reglamentar la jurisdiccion de los poderes públicos y fijar la estension de las facultades que corresponden á los tribunales, se toma garantías mas fundamentales.

Era, en efecto, señor presidente, motivo de alarma, en algunas épocas, la estension del poder de la Iglesia.

Este poder habia llegado á tomar un incremento tan grande, tan desmedido, que dominaba completamente al mundo.

Los papas hacían y deshacían reinos, daban y quitaban autoridad y poder. Uno de ellos trazó una línea, como dice el doctor Velez Sarsfield: una meridiana á través del océano, y dió á Portugal la parte oriental y á España la parte occidental de un nuevo mundo. El mismo doctor Velez afirma que este reparto hecho por un papa entre dos naciones de Europa, cuando la Europa entera tenía derecho á inmiscuirse en los asuntos de la América y determinar su poblacion, civilizarla, en una palabra, ese reparto, de-

cta, hecho por un papa, ha sido la causa de la despoblacion del continente americano.

Ellos intervenian en los asuntos mas trascendentales, en la guerra y en la paz; decretaban las cruzadas—segun el mismo doctor Velez y segun todos los autores—contra la decision de los monarcas. Los monarcas veían atravesar su territorio por ejércitos enteros, que se formaban con fines religiosos, y tenían que mantenerse prescindentes ante ese espectáculo por temor siempre al poder colosal de la Iglesia.

Ellos determinaron la guerra de los españoles contra los muros, segun el doctor Velez, causa tambien del atraso de la España en las épocas posteriores.

Ellos dieron preeminencia a los eclesiásticos en todos los estados; los bienes de los eclesiásticos tenían privilegios; la ley civil no alcanzaba a estos bienes.

Todo poder, toda dignidad, todo beneficio, provenía de ahí, y todo martirio y toda opresion tambien, podía tener su origen ahí.

En esta situacion, justo es reconocer que los poderes temporales buscaron un medio de contrarrestar ese poder inmenso; y, conforme fueron despertando las monarquías de la tierra de esta opresion, fueron introduciendo en su derecho civil elementos de resistencia contra ese poder.

Ese poder colosal, cuya muestra principal fué la inquisicion, que se recuerda todavia con espanto, no ha dejado rastro trascendental entre nosotros; pero sí ha dejado alguna muestra, que figura todavia como una amenaza contra los derechos de los ciudadanos, entendidos como los entienden los estados modernos.

Esa muestra son los tribunales eclesiásticos.

La defensa contra esa amenaza, son los recursos de fuerza, que figuran en todas las legislaciones.

No debemos mirar, señor, en esto una concesion de los papas; y en este punto me voy a permitir molestar un poco la atencion de la cámara, trayendo a la vista algunos antecedentes.

Se dice con frecuencia: Los gobiernos de América no pueden invocar las concesiones que se hizo a los reyes españoles, como patronos de la religion: no son sus herederos; porque los papas concedieron a los reyes españoles, en carácter personal, ciertas prerrogativas.

Pero, yo sostengo, a la par de todos los hombres ilustrados de este país que, si concesion hubo, no fué a la persona de los reyes españoles, sino al representante de una soberanía; y que, si esa concesion tenía un motivo, ese motivo fué la propaganda de la

religion, fué las necesidades de la conquista.

Si esos fueron los motivos, las causas subsisten hasta ahora, porque la conquista, que comenzó ahora trescientos años, no ha concluido sino hace tres años, al principio del gobierno actual: todavia se puede encontrar fresca la tinta con que se imprimieron las memorias, los relatos de viajes, las últimas escursiones al desierto para someter a los bárbaros.

Entonces, puede decirse, pues, que el mandato de los papas no ha concluido, si quisiéramos nosotros entender que realmente ha habido un mandato.

Pero, se pregunta tambien: los papas, al hacer estas concesiones, daban algo suyo? ¿Era una propiedad que les pertenecía exclusivamente? ¿Tenían ellos un derecho ó concentraban ellos el derecho de todos los hombres, habitantes de la tierra, tuvieran ó no la religion católica, y ese derecho podían otorgarlo en la forma que lo habían otorgado a los reyes de España?

Sostener esto es sostener una teoría contra la esperiencia y contra la historia.

Los mismos papas se verían en el caso de no poder sostener semejante teoría.

En efecto ¿cómo se hacía el nombramiento de los primeros papas? ¿De dónde emanaba su poder?

Ellos fueron nombrados por eleccion del pueblo, y representaban y tenían el poder que ese pueblo había delegado en ellos.

Entonces, pues, si algun poder podían traspasar a otras manos, no traspasaban otro poder que el que habían recogido en el seno del mismo pueblo a quien lo devolvían.

Esto, por lo demás, está conforme completamente con las teorías respecto a la soberanía que priman en la actualidad en todos los hombres que piensan.

En ese caso las concesiones de los papas, si se quiere llamar a esto concesiones y no recobro de derechos, habrían sido la devolucion de una parte de la soberanía, a pueblos que debían tenerla.

Indudablemente, todo estado debe tener una soberanía completa, definida, independiente de todo otro poder extraño; y no se comprende el siquiera que haya posibilidad de abusos, porque no se comprende que el soberano absoluto pueda cometerlos.

Estas concesiones, estos derechos que se supone en determinadas corporaciones ó individuos, no son sino artificios para aplicar de un modo mas equitativo y mas apropiado la forma de la soberanía en detalles particulares.

Pero dicen todavia, ó nos pueden decir los que sostienen la necesidad de borrar de nuestra legislacion esta parte del derecho: la

Iglesia es de origen divino; es Estado el de origen humano.

El mismo doctor Velez, autoridad tan respetable en este punto, dice que es un abuso invocar semejante pretencion cuando se trata de las relaciones de la Iglesia y del Estado, y sostiene, como sostienen todos ahora, que si la religion es de origen divino, el Estado, á lo ménos, existe con el permiso de la divinidad.

Las funciones del Estado son tan grandes como las de la Iglesia, y concurren el desenvolvimiento de la humanidad en la misma escala.

Por consiguiente, al tratar de las relaciones del Estado y de la Iglesia, esas invocaciones estarían fuera de lugar.

Tanto derecho habia para exigir el predominio de uno como de otro poder, fundándonos en esa teoria,

No es tampoco mas atinado sostener que las formas actuales de la Iglesia en su desenvolvimiento deben predominar sobre las formas actuales de la sociedad civil; en una palabra, que la organizacion de los tribunales en lo eclesiástico sea mejor, y debia preferirse á la organizacion de los tribunales en lo civil.

Porqué? Porqué podría contestarse, volviendo sobre el mismo argumento ya presentado, su pretendido origen divino, no le dá prioridad, han sido hechos en diferente época.

Es evidente, señor presidente que con el último artículo de San Pedro, no se levantó la legislación actual; que la Iglesia, este edificio colosal tal cual lo encontramos formado hoy, ha ido haciéndose poco á poco: cada concilio ha añadido una cosa, cada papa ha podido retirar algo.

Las formas de esta Iglesia se han ido acomodando á las circunstancias, y se ha hecho eso con todo tino. En un país donde encontraba gobierno débil, levantaba su dominio; y en otro donde encontraba un gobierno fuerte se replegaba y deprimía sus pretenciones.

Así, pues, amoldándose á las circunstancias, respondiendo á las necesidades del pueblo, respondiendo á las necesidades de la cristiandad, y muchas veces, respondiendo á las necesidades ó á las exigencias de lo que no era la cristiandad, se ha formado el elemento que ahora tenemos.

La organizacion de los tribunales eclesiásticos no data del principio de la cristiandad; no me parece que deba insistir en este punto.

En el principio, no existían los obispos en la forma que los hay ahora, ni habia la misma cantidad de prelados, ni habia la subdivision de jurisdicciones, ni las clasificacio-

nes que hay ahora: eso ha ido formándose como toda institucion, con el andar del tiempo.

Entonces el origen divino en virtud del cual los tribunales eclesiásticos predominarían sobre los tribunales civiles, no puede admitirse.

Vamos á otra parte.

Los procedimientos de esos tribunales ¿serían acaso mejores que los de los tribunales civiles?

También sostengo que no es probable que así sea.

Por una razon muy sencilla:—los procedimientos, en los tribunales civiles, están constantemente en estudio, son examinados con toda meditacion por hombres muy competentes y bien intencionados, son discutidos en la prensa, en los parlamentos; se lleva á ellos toda la cantidad posible de saber humano, á fin de hacerlo lo mas práctico, lo mejor y lo mas sencillo.

Mientras que los procedimientos de los tribunales eclesiásticos, como todo lo que corresponde á la Iglesia, no se mueven en virtud de muy fuertes y poderosas razones; cada cosa es secular. Como hay la creencia de que muchas de ellas ó todas ellas tienen origen divino, los humanos no se atreven á tocarlas.

De aquí resulta que los procedimientos de los cánones no son de todo aplicables á la vida de las sociedades modernas. Y no deben ser.

Véase, pues, lo que resultaría, si acaso se borrarla de la legislación este recurso de fuerza.

Los tribunales eclesiásticos, con su facultad de conocer, podrían entonces conocer en asuntos que no fueran de su competencia, y el individuo arrastrado á ellos, que hubiera ocurrido voluntariamente, ó que fuera envuelto en alguno de aquellos artificios que se puede crear para hacerlos concurrir á un tribunal, no tendría medios de defensa, sería juzgado por ese tribunal sin que pudiera rechazarlo, aun cuando fuera evidente su falta de competencia en la materia.

Con su facultad para emplear un modo de conocer, podría ese tribunal emplear los procedimientos de los cánones, muchos de los cuales no creo que serían de uso en estos tiempos. Acaso podría llegarse á aplicar el tormento, para obtener pruebas; sería un modo de proceder...

Con su derecho de no otorgar, negaría toda apelacion, y el individuo no tendría absolutamente elementos para salir de aquella jurisdiccion, no podría usar de un derecho que por una parte le daría el poder civil, y que, por otra, con el mantenimiento exclusi-

vo del tribunal eclesiástico en esa forma, se le quitaría.

Y quedaría entonces violada la forma mas elemental de la organizacion de los tribunales, aquella que dice que los tribunales han de tener una competencia restringida, para entender en determinados asuntos, los que señala la ley.

La tendrían entonces los tribunales eclesiásticos, por esa supresion, ilimitada.

Creo, por lo tanto, señor presidente, que la cámara de diputados haría bien en sostener el recurso de fuerza, con las tres formas en que se halla dividido. Porque me parece que los tres afectan fundamentalmente los derechos de los ciudadanos, y quizás los dos últimos todavía de un modo mas formal.

En efecto, un tribunal que conoce en un asunto que no es de su competencia, puede, apesar de eso, conocer bien y aplicar los procedimientos justos y legales.

Pero un tribunal que, aunque en asunto de su competencia, aplica procedimientos que violan los derechos de los individuos, que niega la apelacion, en fin, que niega todo recurso á los litigantes, procede mas manifestamente en contra de sus derechos, puede lesionar mas la justicia.

Señor Presidente: El poder ejecutivo cree que el recurso de fuerza debe ser sostenido, por lo tanto; que este recurso tiene un origen secular, que ha sido incommovible hasta ahora, que representa un derecho del Estado, que es una garantía para los ciudadanos, y que no hay motivo ninguno que en las presentes circunstancias obligue á retirarlo de la legislación civil. Mas bien, quizá, habría motivo para pensar que debe afirmarse con mayor fuerza aún.

Sr. Estrada—Pido la palabra.

Sr. Calvo—¿Si el señor diputado me permite que diga dos palabras antes que él?

Es con el objeto de hacer una observacion que me parece que puede ser útil para encaminar el debate á sus verdaderos fines.

Hasta ahora, los bellísimos discursos que hemos oído han tenido un efecto que puede considerarse interno; es decir, cada uno de nosotros ha sentido vivamente lo que el orador ha dicho, y le ha acompañado. Pero en mi calidad de representante del pueblo argentino, observo la carencia de una parte de la discusion que es indispensable: es la parte constitucional.

Si en vez de mostrarme la historia antigua en todos sus detalles, de seguir á la humanidad en sus diferentes evoluciones y manifestaciones; si, partiendo con la rapidez de la electricidad, dejamos todo eso atrás y saltamos del pasado al presente ¿por qué no tomaríamos la constitucion argentina, para

fundar estas dos proposiciones: ¿Está ó no perfecta y absolutamente dividida la soberanía popular, en nuestro país, en tres entidades? Si el poder judicial es una de ellas, estos recursos de fuerza atacan al poder judicial en el carácter constitucional, ¿ó pueden existir á la vez el poder judicial, segun la constitucion lo ha establecido, y el poder judicial eclesiástico, que no es ya el poder judicial civil, simultáneamente?

Si estas dos proposiciones fueran tratadas, me parece que tendríamos una base de criterio mucho mas exacta que aquella que puede deducirse de la historia del papado como de los fines de la Iglesia. Porque una y otra cosa pareceme, hablando con todo respeto, perfectamente impertinente al caso.

Nosotros estamos reunidos aquí en representación del pueblo, que tiene la soberanía. Ahora, yo desearía saber por qué medio se podría alterar el artículo constitucional «que nadie será juzgado sin previa ley;» como podría alterarse las diferentes divisiones existentes.

He pedido la palabra por un momento solamente, y con el deseo de ilustrar mi criterio, indicando á los oradores un punto que me parece que no se ha tocado hasta ahora.

Perdóneme el señor diputado por Buenos Aires que haya abusado de su bondad.

He dicho.

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Estrada—Señor presidente:

El señor ministro de justicia ha dicho con muchísima exactitud que la cuestion que está á la consideracion de la cámara no es una cuestion de teología, aunque se roza con ella, como todas las de esta naturaleza, sino una cuestion de derecho público eclesiástico, en cuanto afecta las relaciones de la Iglesia con el Estado.

Partiendo de esta manera de apreciar la naturaleza de la cuestion en debate, el señor ministro tambien decia: El recurso de fuerza presenta á su favor, *prima facie*, el título de la antigüedad: es inmemorial en Europa, y es, en América, tan antiguo como la conquista.

Despues entraba á indagar cuál ha sido su fundamento,—parte de su discurso de que me ocuparé mas tarde.

Por el momento me detengo en esa su primera observacion, porque yo deduzco de los datos que el señor ministro adujo en seguida de plantear así la cuestion, una consecuencia completamente contraria á la suya.

Si el señor ministro de justicia entiende que esta cuestion afecta las relaciones de la Iglesia y el Estado, tiene, necesariamente,

que convenir tambien en que es un punto que no puede ser competentemente definido sino por concordatos entre la Iglesia y el Estado.

Ahora, si los textos que pueden alegarse, existentes en nuestra legislacion antigua y en la legislacion europea, relativos á recursos de fuerza, no son producidos por concordias entre la Iglesia y el Estado, tambien tendrá el señor ministro de justicia que reconocer que esos textos no forman parte del derecho legítimamente constituido, y desaparece el título de antigüedad, cuyo valor estimaba en tanto, en favor de sus ideas.

En verdad que hay muchos publicistas que dicen que es inmemorial, en Europa, el recurso de fuerza; pero lo dicen en el sentido de que no puede establecerse con precision cuál es la fecha en que esa pretension del Estado comenzó á hacerse efectiva, conviniendo, sin embargo, en que no remonta mas allá, como decia el señor diputado por Buenos Aires hace un momento, del siglo XVI para España y del siglo XV para Francia.

Indagaba el señor ministro cuáles habrían podido ser los fundamentos por los cuáles el Estado reivindicaba esta facultad de hacer intervenir, por medio del recurso de fuerza, á los tribunales civiles, en radio de accion de de los tribunales eclesiástico y llegaba á la misma conclusion á que, sin embargo de ser tan prolijo, tan erudito en todas sus otras investigaciones, llegaba el famoso juriconsulto Solorzano Pereyra: á resolver la cuestion con una sentencia de Séneca el Tráxico, en cual se afirma que el soberano debe proteger á todos sus súbditos.

El señor ministro trazaba el cuadro del conflicto en que la Iglesia y los poderes civiles han estado en Europa, durante largo número de años.

Yo no comparto, de ninguna manera (innecesario es decirlo) su manera de apreciar estas cuestiones.

Si es verdad que la Iglesia ha dominado por largos siglos todas las manifestaciones de la vida, y toda la direccion del movimiento social de los pueblos, es verdad tambien, como lo dice Macaulay, que no era ultramontano sino un protestante que ha dominado como domina, el sol los astros: por su propia superioridad!

Convento sí con el señor ministro en que el recurso de fuerza es, de parte del poder civil, un medio de hostilidad contra la Iglesia.

El lo llama de defensa, yo lo llamo de agresion.

Pero si reconoce que es un arma de defensa, si reconoce que es una arma de guerra

en poder del Estado, y es evidente que no se puede suponer que haya jamás formado parte del derecho constituido por concordias entre la Iglesia y el Estado, basta, por consiguiente, considerar la cuestion en el propio punto de vista en que la ha colocado el señor ministro, para destruir la base de todo su razonamiento, que es la antigüedad, la posesion legitima de parte del Estado de la pretendida facultad.

Nos decia el señor ministro tambien que lo que es nuevo en el mundo es la existencia de los tribunales de la Iglesia: de jueces eclesiásticos encargados de ejercer una jurisdiccion en el foro externo.

Si el señor ministro afirma que es inmemorial la existencia de los recursos de fuerza, no puede decir que es moderna la existencia de los tribunales eclesiásticos...

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Si me permite...

Yo no he afirmado semejante cosa; no he dicho que son modernos. Lo que he dicho es que no todo lo que hay en la Iglesia es contemporáneo con su nacimiento; que eso ha ido formándose poco á poco, y no creo que haya persona alguna capaz de sostener que desde el nacimiento de la Iglesia, ya estaban organizados sus tribunales en la forma en que lo están actualmente.

Pero no he dicho que sean nuevos, desde que contra esos tribunales se levantaba el recurso de fuerza. Cuando ménos, serían contemporáneos de aquella resistencia.

Sr. Estrada—Contestaré al señor ministro de justicia, ya que acaba de decir que no espera encontrar persona que afirme que la existencia de los tribunales con jurisdiccion exterior es contemporánea de la fundacion de la Iglesia, que ha encontrado á esa persona.

En efecto, en el Evangelio mismo consta que el Señor recomendaba á sus discípulos que controvertieran, dentro del seno mismo de la Iglesia, las cuestiones que entre ellos pudieran surgir.

En las epístolas de San Pablo, hay dos pasajes: en uno, dá reglas sobre procedimiento en materia de juicios al obispo Timoteo, y reconviene en otra á los fieles de Corinto por cometer el abuso de llevar sus contiendas ante los jueces paganos de los tribunales seculares.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿A cuántos siglos del nacimiento de la Iglesia?

Sr. Estrada—En tiempo de San Pablo, señor.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pero ¿á cuánto tiempo del nacimiento de la Iglesia?

Sr. Estrada—El año 66 de Jesucristo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Sesenta y seis años hacía, lo que no era ya contemporáneo del nacimiento de la Iglesia.

No había obispos en aquel tiempo, ni tampoco había tribunales....

Sr. Estrada—Los hubo desde la resurrección del Señor.

Los obispos fueron investidos de facultades judiciales en el fuero exterior. Los tribunales de la Iglesia son, por consiguiente, contemporáneos de su nacimiento.

Y habiendo sido arrastrado por la interrelación del señor ministro á demostrar la existencia de estos tribunales en épocas tan primitivas, escuso, señor presidente, otros antecedentes que podrían también demostrar su libre funcionamiento á través de los siglos.

Queda por consiguiente, probada que la existencia de los tribunales de la Iglesia es tan antigua como ella, y queda también probado que la existencia de los recursos de fuerza no es antigua ni es debida á concordias entre la Iglesia y el Estado, sino que, por la propia confesión del señor ministro de justicia, ha sido una arma de guerra del Estado contra Iglesia.

El señor ministro de justicia añadió que no hay razón ninguna para conjeturar que en los tribunales de la Iglesia, encuentren los litigantes suficientes garantías, ya por razón del procedimiento, ya por la competencia de los jueces.

Los tribunales de la Iglesia son compuestos de hombres, y no creo que sean hombres superiores á ellos—los que componen los tribunales civiles, y como se ha demostrado perfectamente, la facultad de interpretar la ley corresponde á tribunales de la misma categoría y de la misma naturaleza que los poderes de los cuales emana.

Y recordaba á este propósito el señor ministro el antiguo y famoso tribunal de la inquisición.

Desgraciadamente, no se puede tocar cuestión alguna, en la cual se ventile derechos de Iglesia, sin que este fantasma de la inquisición se haga aparecer de una manera ó de otra.

Yo no negaré al señor ministro los abusos á que ha llegado el tribunal de la inquisición en España y en Portugal. Pero yo quiero preguntar, sí, al señor ministro de justicia, si han sido los recursos de fuerza, acaso si ha sido la acción del Estado, si ha la intervención del poder civil, la que morigerado á esos tribunales, la que ha servido de amparo á todos aquellos que podían ser víctimas de sus abusos.

No fué por medio de los recursos de

fuerza, no fué por medio de los reyes, como la inquisición fué contenida en sus abusos.

Fueron los papas Sisto IV, Julio II, Leon X, y otros, es decir, las autoridades superiores de la Iglesia las que, para ejercer actos de misericordia aun sobre los criminales, redujeron, dentro de los términos estrictos de la justicia y de la caridad, los procedimientos de esos tribunales, ó por lo menos hicieron esfuerzos enormes, no siempre seguidos de éxito, por conseguirlo; y no siempre seguidos de éxito, porque venían á contrariar á esos mismos poderes temporales, á los cuales el señor ministro de justicia decía que deben entregarse los hombres, dándoles la soberanía ilimitada y absoluta, porque son los únicos capaces, por su propia naturaleza, de proteger el derecho y la justicia.

Sin duda, señor presidente, que el Estado tiene una soberanía, sin duda que esa soberanía, como el señor ministro de justicia, decía, viene de Dios; pero todas las potestades vienen de Dios ordenadamente, en una gerarquía á la cual se acomodan por razón de sus fines, y de su naturaleza adecuada á sus fines.

El Estado es la sociedad uniformada por el principio de autoridad, á fin de definir el orden de derecho, y concordar todos los órganos que la constituyen. Es el principio formal del organismo social.

Pero el fin del hombre no se consuma sobre la tierra; el fin del hombre se consuma en una vida ulterior. La Iglesia es el órgano de la revelación divina; ella tiene la potestad de enseñar; ella tiene la misión de llevar á los hombres á su fin último y supremo.

Por eso la Iglesia escapa del radio del organismo social; por eso forma un orden de relaciones diverso; por eso forma una sociedad perfecta, es decir, una sociedad soberana, y siendo una sociedad soberana, no es un colegio nacional dentro del Estado, sometido por consiguiente á la soberanía local; tiene existencia propia, tiene la facultad de dictar leyes y de organizar los medios de hacer efectivas esas leyes.

Tiene, por consiguiente, una potestad legislativa como tiene una potestad docente, y tiene también la potestad judicial independiente de la del Estado, y que no puede en manera alguna ser trabada.

Ahora, si esta doctrina, que es la única sobre la cual puede hacerse reposar un orden de instituciones verdaderamente regular, y libre, se opone á aquella otra, según la cual la soberanía de los estados no reconoce ningún límite y se extiende á todo cuanto puede concebirse, á todo cuanto puede ser imaginado, entónces se lleva á los pueblos á estrearnos totalmente contrarios de aquellos que el

señor ministro de justicia ha manifestado amar tanto.

El principio del derecho divino de los reyes, que es un principio anti-católico, se ve renacer en los tiempos modernos bajo la paradoja de la soberanía del pueblo. Atribuyendo á un sugeto ó á otro un poder que no reconoce ningun límite, un poder que no está enfrenado ni por la autoridad de la Iglesia ni por el derecho natural ni por ninguna otra regla, se constituye una verdadera, positiva y fundamental tiranía.

Esa tiranía era la forma de constitucion de todos los estados paganos. Contra ella ha reaccionado el cristianismo, precisamente en virtud de este principio de la libertad de la Iglesia, de su soberanía absoluta; y en los tiempos calamitosos de la edad media y poco despues, ejerciendo ese grande poder que parecia censurar el señor ministro de justicia... Es verdad que en siglos de mayor fé, los papas han absuelto pueblos del vínculo de fidelidad y han destronado reyes.

De esa manera, señores, han contenido á los tiranos, y han enfrenado los movimientos anárquicos de las naciones. De esa manera ha constituido la civilizacion moderna y han fundado este régimen de libertad de que hoy día quiere privarse solamente á la Iglesia.

Si hemos de sostener, por consiguiente, señor, las verdaderas y sanas doctrinas sobre las cuales se funda todo este régimen de instituciones—que amo yo tanto como el señor ministro de justicia,—ha de ser dejándolo sobre su base natural, y no sacándolo de la única fuente que contiene abundante sávia para rejuvenecerlo y mantenerlo en su vivacidad y movimiento.

Pasando ahora á la observacion que el señor diputado por la capital tuvo la bondad de hacerme ántes de que yo tomara la palabra, diré, brevemente, que del punto de vista constitucional, hay dos consideraciones que tener en cuenta.

La constitucion argentina es, en lo sustancial, cristiana; reconoce la existencia de la Iglesia, no como una comunidad accidental,—formada por participacion de ilusiones ó de preocupaciones,—y organizada dentro del territorio argentino,—sino la Iglesia, la Iglesia como sociedad perfecta, la Iglesia como sociedad de doctrina, como sociedad revestida de poder, como depositaria de la revelacion cristiana. Y establece que las relaciones del Estado con la Iglesia deben ser definidas en la forma de un concordato.

Por consiguiente, no se arroga la constitucion la facultad de que el poder político ó civil dirima por sí mismo todas estas dificultades y zanje todas estas cuestiones ó controversias.

Es verdad que hay artículos en los cuales se refiere el derecho de patronato; hay artículos que se refieren á otras de las regalias tradicionales del estado español, que se presume, por algunos, haber sido transmitidas á los gobiernos independientes de América. Pero es entendido que esas declaraciones ó cláusulas de la constitucion tienen solo un valor condicional.

La constitucion establece qué poderes ejercerán tal ó cual facultad, si será el poder ejecutivo ó el judicial; pero es en el caso que la potestad supuesta en el ejercicio de esa facultad sea adquirida por el Estado. ¿En qué forma? En la forma correcta, en la forma que viene del principio de la independencia de la Iglesia, del respecto Estado, en la forma que la constitucion misma establece cuanto dice que debe celebrarse concordatos entre la Iglesia y el Estado.

Ha recordado tambien el señor miembro informante de la comision, creo, que la constitucion de 1853 habia establecido como una de las facultades de la suprema corte de justicia, la de entender en los recursos de fuerza.

El número 8 de *El Redactor*, de la convencion revisora de la constitucion de Buenos Aires contiene una esposicion, que creo poder atribuir al señor doctor Velez Sarsfield, y que sirvió de base á la eliminacion de esa cláusula.

Es verdad que, como el señor miembro informante lo recordó al principio de esta sesion, el señor doctor Velez decia que los recursos de fuerza podrian ser una facultad de los tribunales de provincia, mas bien que de los tribunales nacionales. Pero lo decia condicionalmente: en el caso que los recursos de fuerza subsistieran.

Por lo demás, el señor doctor Velez era adverso á los recursos de fuerza, y contra ellos espuso razones análogas á las que el señor diputado por Córdoba manifestó en la sesion del viernes pasado, cuando contestó mi primer discurso.

No creo que haya en la constitucion ningun otro antecedente relativo á la materia, sino estos dos: la eliminacion de los recursos de fuerza, antecedente que no es por cierto favorable á aquellos que creen interpretar bien el espíritu de la constitucion sacándolos del fuero federal, para llevarlos al fuero provincial; y el reconocimiento expícito que ella hace de la necesidad de celebrar concordatos con la Santa Sede, para dirimir todas estas cuestiones.

Demostrado por consiguiente, que aun cuando diéramos á la constitucion la interpretacion mas rigurosa, llegaríamos siempre á consecuencias perfectamente concordantes y congruentes con la buena doctrina cris-

tiana,— que es la buena doctrina social y política,—insisto en aconsejar á la cámara, no obstante las razones espuestas por el señor ministro de justicia, la eliminacion del inciso que está en discusion.

He dicho.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pido la palabra.

Quiero dejar espresada con precision mi idea respecto á un punto que no es de importancia, pero que tiene ciertas atingencias con la erudicion en esta materia, en la cual le confieso su inmensa superioridad al señor diputado que deja la palabra.

Lo que he dicho, quiero decir, que es y será verdad, es lo siguiente: que la organizacion actual de la Iglesia con todos sus elementos, con todos sus recursos, con todos sus tribunales, con todas sus autoridades, en una palabra, no es ni ha podido ser contemporánea con el nacimiento de esa Iglesia.

El señor diputado me contestó al momento, había obispos, había...

Sr. Goyena—Y es cierto...

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Si le llaman obispo á San Pedrol

Sr. Goyena—Si, señor...

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pero no en las condiciones que entendemos nosotros como propias de los obispos actuales y en las que la cámara ha entendido apreciando lo que he querido decir al referirme á la organizacion actual de la Iglesia. Es evidente. ¿Dónde estaba la catedral, el cabildo...

Sr. Estrada—En el Cenáculo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Así, con esa clase de metáforas, habia de todo desde el principio del mundo!

Sr. Estrada—Me pregunta donde estaba ubicado un establecimiento, y yo se lo digo.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Pero no existia la organizacion actual. No son los cánones de aquel tiempo. Es sabido que toda la legislacion se ha formado poco á poco. Y el señor diputado por mas erudicion que tenga, no puede decir que todo ha salido de golpe, despues del último suspiro de Jesu Cristo: obispos, diáconos, subdiáconos, chantres, sotranches...! (*Risas y aplausos*).

Siento que se haga manifestaciones inadecuadas con motivo de lo que acabo de decir. Este es un argumento formal, y lo presento como tal.

Sr. Estrada—Por eso le digo formalmente tambien: que en lo que el señor ministro quiere llamar la catedral, en el Cenáculo, el dia de la ascension del Señor, había obispos, presbíteros, diáconos, subdiáconos...

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—...Carden-

ales, obispos... y todo lo demás! Sostengo que no había tal cosa!

Muy bien, señor; si se ha formado así esa legislacion, se ha formado de un modo anormal.

Yo no puedo admitir que así se haya formado!

Si se ha formado así, se ha formado en contra de todas las reglas humanas de procedimiento, que obligan á ir poco á poco, añadiendo, quitando, segun sean las necesidades que haya que atender.

Hay otro punto que no quiero dejar pasar, que ha tocado el señor diputado.

El ha dicho: La Iglesia tiene sus preeminencias, no es alcanzable por el poder civil, vive de un modo especial, apartada de las reglas generales de la sociedad civil, constituye una sociedad perfecta; tendrá relaciones, pero no tiene subordinaciones.

Creo que estas son poco mas ó menos sus palabras, ¿no es así?

Sr. Estrada—Sí, señor.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Muy bien.

Nada de eso puede tener una entidad que no puede hacer respetar sus decisiones, que necesita del poder civil para hacerlas efectivas, que no pueden vivir sin el poder civil, que no tiene ni la menor sombra de poder desde el momento en que le falte el apoyo de la ley civil.

Sr. Goyena—¿Quién apoya á Leon XIII?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—La soberanía...

Sr. Goyena—La soberanía del Papa.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿Cómo ha de ser la Iglesia soberana, si no puede hacer respetar sus principios y sus disposiciones por su propia autoridad, sin el apoyo de una entidad estraña?

Sr. Estrada—En buenas instituciones cristianas, señor ministro, el estado *debe* la proteccion de sus tuerzas á las disposiciones de la Iglesia.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Esto es lo mismo que decir: El estado conserva su soberanía y la puede *prestar* á la Iglesia, pero residiendo en él.

Sr. Estrada—La *debe*.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Muy bien.

Entónces esta sociedad tan perfecta de que el señor diputado nos habla, es una sociedad imperfecta, á mi modo de entender, porque no puede hacerse efectiva su institucion sinó con el concurso, con la concesion y con la fuerza que le presta el poder civil. Por eso sostengo que no hay mas poder que el poder soberano del pueblo representado por su gobierno.

El señor diputado nos decía que este era un poder opresor.

No, señor, no es exacto; nadie se oprime á sí mismo!

Eso sería lo mismo que sostener que la circulación de la sangre es un germen de muerte, cuando mantiene la vida.

Nadie puede decir que se tiraniza á sí mismo cuando hace un acto de su propia voluntad: eso es una paradoja!

Sr. Estrada—La soberanía de la multitud es la opresión de todos los individuos.

Sr. Gomez—Y en nombre de la voluntad de esa muchedumbre es que el señor diputado está sentado en este recinto.

Sr. Goyena—El señor ministro sostiene que la policía es mas que la suprema corte!

Sr. Leguizamon—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio, despues del cual hará uso de la palabra el señor diputado.

—Así se hace.

—Pocos momentos despues continúa la sesión.

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor diputado por Entre-Ríos.

Sr. Leguizamon—Señor presidente: Entro en esta discusión con el temor natural que debe suponerse cuando ella ha sido tratada estensa y lucidamente por algunos de los primeros oradores que tiene la cámara.

Mi opinion habría sido como lo manifesté á algunos de mis honorables colegas anteriormente, no dar una estension tan considerable á este debate.

Pero respetando la libertad natural que cada uno de los miembros de la cámara tiene para la esplanacion completa de sus ideas, creo, á mi vez, que debo tocar, aunque no sea mas que de paso, los tópicos que se presentan como dominantes en el punto incidental de la ley que discutimos.

Hay desde luego, á mi entender, una cuestion de forma que afecta á las reglas parlamentarias de la discusión.

Esa cuestion de forma sería, á mi juicio, esta: nos estamos ocupando, en una ley de organizacion de los tribunales, de las facultades que deben tener los jueces y corporaciones judiciales que hemos organizado por esa misma ley.

Al llegar al punto que se relaciona con las facultades que deben tener las cámaras de apelacion de los tribunales de la capital, se encuentra este inciso, en el cual se ha detenido el debate: la cámara de lo civil conocerá en última instancia de los recursos de fuerza.

La sola manera de redactarse este inciso demuestra que no se trata de una cosa nueva sino de algo que se encuentra establecido, incorporado á nuestra legislacion y que tiene una denominacion y un sentido completo en la inteligencia general de todos los que manejan esta clase de asuntos.

Lo pertinente entónces, á mi entender, es discutir si conviene atribuir el conocimiento de los recursos de fuerza á la cámara de lo civil de la capital, ó si á algun otro tribunal.

Me habría explicado, desde este punto de vista, que se hubiesen hecho objeciones respecto á la conveniencia y propiedad de atribuir á la referida cámara el conocimiento de este asunto; pero no me esplico claramente cómo es que se viene, con motivo de este incidente, á discutir la existencia, legalidad y conveniencia de los recursos de fuerza.

La comision se encuentra entónces en su verdadero terreno cuando sostiene que, discutiéndose esta ley en el punto á que me he referido, la cámara de lo civil debe conocer en última instancia de los recursos de fuerza.

No se trata de una ley de procedimientos en la cual sería permitido sostener, ampliar ó restringir las materias que deben comprender los asuntos que se lleven ante los tribunales.

Esa sería entónces la cuestion de fondo: saber si deben existir ó no en nuestros procedimientos judiciales los llamados recursos de fuerza.

La discusión debia detenerse en este punto, y creyendo que es lo correcto no pasar de allí, habia pensado, y así lo haré, votar por el inciso como lo propone y lo sostiene últimamente la comision.

Sin embargo, como el hecho de haber penetrado en el fondo del asunto y de haber entrado á discutir con entera libertad las cuestiones que directa ó incidentalmente se relacionan con el fondo de ella, pudiera dejar en el ánimo de algunos miembros de la cámara la conviccion de que este inciso está mal colocado donde la comision lo ha propuesto, voy á entrar, aunque sea ligeramente, á examinar tambien el fondo, del asunto bajo su faz constitucional y bajo su faz legal.

Los recursos de fuerza existen incorporados á nuestro derecho público, desde nuestra existencia independiente como nacion. Existían antes tambien incorporados al derecho público de nuestra madre, la España, desde varios siglos anteriores á nuestra independencia.

Los motivos por los cuales ellos fueron creados y tomaron un asiento en las leyes

españolas, han sido dados de una manera somera, atribuyéndose por unos al sentimiento de la independencia del poder civil, en oposicion al poder absorbente de la Iglesia; por otros, como un medio de defensa para los derechos del ciudadanos que actúan en la vida colectiva de una nacion.

No me sería dado, señor presidente, pronunciarme de una manera firme y segura sobre la propiedad de una u otra de estas esplicaciones; basta á mi propósito y á mi conviccion hacer presente que uno de los primeros actos de nuestras autoridades, despues de la Independencia, fué recordar la existencia de los recursos de fuerza y atribuirlos al poder civil de la república.

El decreto de 1813, muy poco posterior á la proclamacion de nuestra independencia, los consignó de una manera espresa como atribucion de los altos tribunales civiles. El reglamento del congreso del año 17 confirmó la existencia de los recursos de fuerza como una atribucion de los altos tribunales civiles del país; y todas las leyes y decretos posteriores, comprendido el decreto del año 34, que organizó y estableció los tribunales eclesiásticos, confirmaron siempre y de una manera uniforme la existencia de los recursos de fuerza como un derecho innegable del poder civil para los casos que él comprende.

La constitucion del 53, que se ha recordado ántes, consignó la existencia de estos recursos de fuerza y atribuyó su conocimiento, segun tambien se ha recordado, á la suprema corte de la nacion.

La reforma del año 60, sacando el conocimiento de estos asuntos de aquel supremo tribunal, los reservó para el conocimiento de los altos tribunales de provincia; punto en el cual existe una paridad casi completa á aquel que se relaciona con la jurisdiccion sobre la prensa; el cual tambien, por una coincidencia casi feliz, ha venido incidentalmente á tratarse en la discusion de esta ley, deteniéndola en su marcha al parecer natural y tranquila. Tanto el conocimiento de los recursos de fuerza como la jurisdiccion sobre la prensa fué dejado por la constitucion de 1860 al conocimiento de los tribunales provinciales.

El dia que la ciudad de Buenos Aires fué declarada capital de la república y que se juzgó necesario, como condicion de su vida regular, dotarla de tribunales especiales para la administracion de justicia, la disposicion que hoy discutimos fué consignada tambien en los mismos términos, como una atribucion acordada á la cámara de apelaciones en lo civil.

El proyecto que hoy se presenta no hace, entónces, sino confirmar de una manera

exacta lo que ya era parte de nuestro derecho público ántes de ser una nacion independiente como república; lo que ha sido confirmado por cien actos durante el largo tiempo que hace que somos una nacion soberana; lo que fué consagrado últimamente por la ley de 1881, cuando por primera vez la república se dió su capital definitiva.

Recuerdo á designio estos antecedentes legislativos con respecto al asunto, para hacer esta pregunta: ¿qué motivos graves y extraordinarios podrían encontrarse hoy para borrar de una plumada lo que está adherido á nuestro derecho como nacion, despues de una tradicion tan prolongada? ¿Qué causas tan serias, qué acontecimientos particulares han podido ocurrir desde 1881 hasta la fecha, para que el mismo congreso argentino que sancionó hace apenas cinco años esta reforma por una inmensa mayoría (49 votos contra 19, me parece), pueda haber modificado su opinion al estremo de que sea necesario volver sobre el pasado y suprimir de una ley de organizacion de los tribunales la facultad que se consigna en el proyecto que discutimos?

Me permito llamar la atencion de la cámara sobre esta consideracion al parecer incidental, y sin embargo de gran trascendencia para mi espíritu.

Pero se dice, señor presidente, lo que se ha dicho siempre: Los recursos de fuerza importan una depresion, un ataque á la independencia de la Iglesia católica.

Acabo de decir «lo que se ha dicho siempre», porque desde que existen los recursos de fuerza la Iglesia ha pensado siempre lo mismo, y apesar de haber ella pensado de esta manera y de haberse manifestado consecuente, como en la generalidad de sus actos, con su propia posicion, los recursos de fuerza han existido, se han practicado, y se conservan en el poder nacional como uno de los medios de accion que se deducen de la propia soberanía.

Para justificar esta aseveracion, de que los recursos de fuerza son un ataque á la independencia de la Iglesia, se afirma que ellos van en su alcance hasta revocar ó anular los fallos de los tribunales eclesiásticos.

La afirmacion sería verdaderamente lógica, si el hecho fuera completamente cierto.

Pero, no es cierto, señor presidente.

Los recursos de fuerza no tienen mas alcance que la materia de forma.

Cuando un juez civil conoce de cualquiera de los recursos de fuerza, no va al fondo del asunto en sí. Respeta entónces, siempre, lo que constituiría la independencia de la Iglesia, lo que es de su facultad privativa: lo espiritual, el dogma, lo disciplinario.

Bastaría examinar cualquiera de los tres recursos de fuerza para comprender que mi afirmacion es exacta y que ella reposa en la disposicion espresa de las leyes que crearon los recursos de fuerza, y que los han reglamentado durante la dominacion española, y posteriormente durante nuestras leyes patrias.

En el primero de esos recursos, en el de conocer, que, como se ha dicho con entera propiedad, se reduce á una cuestion de competencia, el tribunal, se limita á examinar, *prima facie*, la materia que constituye la contienda y á declarar si á su juicio es materia de jurisdiccion civil, que los autos pasen al juez que corresponde, y si es materia eclesiástica, á devolverlos al juez eclesiástico para que siga conociendo del asunto.

Como generalmente la contienda de competencia es preliminar á todo juicio, no hay propiamente nada en discusion, sino la simple enunciaci3n de una demanda.

La autoridad civil no necesita, entonces, pronunciarse sobre este primer recurso, ni entrar al fondo de la materia que se discute, ni revocar, ni anular, ni desconocer ningun procedimiento del juez eclesiástico.

La declinatoria es una excepci3n previa al al juicio.

El que conoce de la excepci3n, lo saben todos los que tienen nociones de jurisprudencia, no necesita conocer del fondo del asunto.

En el segundo de los recursos, aquel que se refiere al modo de conocer y proceder, el juez civil, autorizado para reconocer de ese recurso, no hace sino examinar si se han violado los procedimientos esenciales al juicio, en la demanda, en la contestacion, en los medios de defensa, en los términos, y se pronuncia en favor de la violacion del procedimiento, que es lo que se llama la fuerza, ó declara que se ha procedido bien, devolviendo, en uno y otro caso, los autos al juez eclesiástico para que acuerde la reforma del procedimiento en garantía del litigante, ó para que continúa su procedimiento.

En ese caso tampoco el juez civil interviene en el fondo de la materia del asunto, que es en lo único que el tribunal eclesiástico puede cifrar su independencia, porque se relaciona con sus facultades privativas sobre el juicio.

El tercero de los recursos de fuerza, que es el que consiste en denegar una apelacion, como se dijo perfectamente, puede muy bien ser incluido en el segundo de los recursos, porque, al fin, se trata simplemente de una violacion de procedimiento, ó de averiguar si se ha violado una garantía para un litigante; y la investigacion del juez civil se limita com-

pletamente, á saber si ha sido violada la garantía del litigante, en negarle ó acordarle un recurso que por derecho habría debido corresponderle.

Si á esto se agrega que los procedimientos regulares del juicio, tanto en lo civil como en lo eclesiástico son comunes, porque son de derecho natural, y aquellos que son de derecho positivo están generalmente armonizados, se vé que el juez civil no interviene por razon del conocimiento de recurso propiamente, en el fondo del asunto, en lo que constituye la peculiaridad, la independencia del juez eclesiástico.

Me parece que esta sencilla enumeracion de las facultades en el conocimiento de los recursos de fuerza descarta completamente la objecion, que pudiera parecer sensacional de que los recursos de fuerza son un ataque á la independencia de la Iglesia.

¿Por qué existen entonces los recursos de fuerza, se preguntan algunos? Y han llegado á decir: En la situacion actual de la sociedad moderna, estos recursos no tienen efecto, no tienen eficacia, no tienen aplicacion.

Indudablemente que no la tendrían, señor presidente, si el objeto de los recursos de fuerza hubiese sido solo munir al poder civil de facultades transitorias de defensa ó de hostilidad, como algun señor diputado ha creido que esto significaban los recursos de fuerza; pero, cuando se demuestre, como me parece que será fácil, que los recursos de fuerza responden á necesidades sociales y políticas de un carácter superior y permanente; cuando se recuerde lo que acabo de manifestar, que ellos respetan siempre en el fondo la independencia del poder eclesiástico, me parece que será fácil llegar á esta consecuencia: los recursos de fuerza deben mantenerse porque son, en poder de la sociedad civil, un medio indispensable de proteccion sobre los ciudadanos sometidos á un poder extraño dentro de su territorio, como es el poder de la Iglesia.

La Iglesia es un poder independiente, se dice; y se agrega, como una consecuencia de esta independencia, es una sociedad perfecta.

Me parece que el señor ministro ha demostrado con una observacion, hace un momento, que no es una sociedad perfecta, desde que necesita, para la ejecucion de sus actos, pedir auxilio al poder civil.

Pero, en fin, no entra en mi propósito examinar en detalle las condiciones de perfeccion que la Iglesia pueda tener como una sociedad. Basta simplemente presentar la cuestion bajo esta faz.

Es una sociedad independiente, una sociedad perfecta, una institucion soberana.

Como yo no concibo que puedan coexistir dos soberanos en el territorio nacional, con iguales medios de vida, con iguales propósitos de dominación, ejercitándose sobre la misma masa de seres que se llaman ciudadanos, deduzco entonces que la sociedad eclesiástica debe ser superior á la sociedad política y en este caso esta debe ser subordinada; ó bien que la sociedad eclesiástica debe ser inferior á la sociedad política y, en este caso, la sociedad eclesiástica debe estar en algun sentido subordinada á aquella.

No pudiendo coexistir dos soberanos igualmente poderosos y con medios completos de acción sobre los ciudadanos, es indispensable reconocer que para la armonía social, para evitar la anarquía de todos los intereses que se relacionan con los individuos, alguien, en ciertos casos, debe tener cierta superintendencia, cierta superioridad, para decidir los conflictos, ó de jurisdicción ó de procedimiento, que puedan afectar la conciencia, ó la vida de los ciudadanos.

¿Cuál sería entonces, de estos dos poderes, el que debiera tener esta superioridad?

¿Cuál sería el juez que resolvería los conflictos, ó en lo relativo á la jurisdicción, ó en lo relativo á las violaciones del procedimiento ó en lo relativo á la denegación de los recursos legítimos?

¿Sería el poder de la Iglesia?

Me parece que ningún hombre que piense como ciudadano, por mas católico que sea, puede asentir á esta conclusión.

Para evitar entonces la anarquía social, en aquello que afecta al conflicto de verdaderos intereses, ejercitándose sobre una misma persona, es indispensable que el poder civil sea superior al poder eclesiástico.

Si la noción de la soberanía nacional es excluyente de toda otra soberanía dentro de los límites del territorio, el juez que emana de la soberanía nacional debe ser forzosa y necesariamente superior al juez eclesiástico, porque de otra manera que darían completamente alteradas todas las buenas nociones de la soberanía.

La constitución, señor presidente, se ha fundido en el molde de estas nociones, que son las únicas que los pueblos modernos tienen como dogma de su nacionalidad.

La constitución no ha reconocido á la Iglesia católica como una soberanía igual á la soberanía nacional, dentro de su territorio. No hay una sola palabra, en la constitución, de donde pueda deducirse una afirmación parecida.

La constitución ha considerado á la Iglesia católica como un culto, como una religión, como una creencia. Creencia preferente para

ella, puesto que impone al gobierno de la nación sostenerla.

Mientras tanto, aún la palabra misma lo traduce. No dice: «sostener á la Iglesia católica», como un poder independiente; dice: «sostiene el culto.»

En Francia, se sostienen seis cultos. Cuestión de número, simplemente.

El católico no es, entonces, á los ojos de la constitución, sino un ciudadano, un habitante. Y todavía señor presidente, no puede ejercer su culto sino con arreglo á las leyes que reglamentan su ejercicio!

En este caso, el católico está en las mismas condiciones del que no es católico, del disidente, el que, teniendo garantida, por la constitución, la libertad del ejercicio de su culto, aspira y tiene derecho á las mismas garantías, á las mismas prerogativas que el católico.

Determinando un poco la necesidad de sostener estos recursos, en presencia de la constitución, recordemos un hecho: el código civil ha sometido al conocimiento exclusivo de los tribunales eclesiásticos las cuestiones matrimoniales y de divorcio entre católicos y protestantes.

¿Debemos confesar que el código civil ha atacado las garantías acordadas por la constitución, ó debemos tratar de armonizar las disposiciones del código civil con la constitución?

Me parece que el buen criterio aconseja hacer lo último, y no lo primero.

¿Con qué derecho podríamos declarar independiente de todo control, de toda superintendencia, al tribunal eclesiástico, cuando el código civil le ha atribuido el conocimiento exclusivo de las cuestiones matrimoniales entre católicos y disidentes?

¿No sería esto algo mas que una contradicción violenta con la declaración de principios de la constitución?

¿No sería llevar un ataque á la conciencia de los disidentes, imponiéndoles la sumisión á un juez que no es el suyo, que no es de su creencia, ni de su culto?

Yo deduzco, pues, de estas disposiciones de la constitución y de estas disposiciones posteriores de nuestro código civil, que la existencia de un tribunal civil que conozca de todo aquello que afecte á las condiciones del litigante, en su carácter de individuo, de ciudadano, es tanto mas necesaria cuanto que es un medio de garantizar las declaraciones y los principios consignados, respecto de cultos y de libertad de religiones, en la constitución que hemos jurado.

Pero hay otra consideración que surge igualmente de la constitución.

Ella declara derechos y garantías esencia-

les á la existencia del ciudadano como á la del simple habitante.

Están consignados especialmente en el artículo 18.

Ningun habitante de la república puede ser penado sin juicio previo anterior al hecho del proceso, ni sacado de sus jueces naturales, ni juzgado por comisiones especiales; su defensa es sagrada, su domicilio es inviolable, su correspondencia y sus papeles son igualmente inviolables, para el juez. No puede aplicársele tormento, ni puede ser obligado á declarar contra sí mismo. En fin, señor presidente, no hay accion de un hombre que pueda ser sometida á los magistrados, cuando no ataca el orden público ó no perjudica á tercero.

¿Se han escrito inútilmente estos principios, en nuestra constitucion?

¿No habrá juez, en nuestra tierra, que pueda hacerlos efectivos, en presencia de un hombre que se presenta diciendo:—El juez eclesiástico ante quien he sido llamado ha violado una de las garantías que me acuerda la constitucion?

Yo pregunto si esta simple consideracion no basta para garantir la existencia de tribunales, en el país, que, con la constitucion en la mano, puedan defender, no solo contra jueces eclesiásticos, contra jueces civiles y contra todos los jueces de la tierra, al ciudadano que invoca una garantía de la constitucion violada!

Esto es, pues, lo que llamaré la faz constitucional del asunto que se discute.

Los recursos de fuerza se hallan incorporados á nuestro derecho público. Los recursos de fuerza, legalmente considerados, no son un ataque á la independencia de la Iglesia. Constitucionalmente considerados, son un modo de ejecucion de las declaraciones consignadas en la constitucion argentina. Los recursos de fuerza tienen, pues, que ser sancionados, no digo por simple mayoría, sino por unanimidad, en un congreso que respete esa constitucion como la fórmula de su juramento.

No quiero ser mas estenso, porque me parece que la cuestion se hallaba bastante discutida, y la cámara debe encontrarse fatigada; pero creo que puede hacerse una consideracion final.

La constitucion ha establecido como atribuciones del congreso, la de reglamentar el patronato nacional y la de arreglar el ejercicio (son sus palabras) el ejercicio del patronato.

¿Quése entiende, entónces, por *patronato*? palabra que aparece tambien en nuestras leyes, como las de *recursos de fuerza*, sin mayor comentario.

El patronato, señor presidente, es la re-

gala acordada y reconocida á los gobiernos católicos ó á las naciones católicas, para intervenir en alguna forma en la administracion de la Iglesia, mediante el deber que esas naciones y esos gobiernos contraen, de sostener el culto católico, y de apoyar á aquella en las decisiones de sus propios jueces y de sus autoridades.

No entraré á averiguar si lo que se llama el *patronato* fué una concesion graciosa de la Santa Sede en su principio, ó si fué simplemente una concesion obligada por el concepto creciente de la soberanía de los pueblos, que formularon esta exigencia como un medio de vida, y de acuerdo con la Santa Sede. Me inclino á creer lo segundo; pero en fin, admito, para mi propósito, que haya sido una concesion.

No por ser una concesion deja ménos de ser un hecho incorporado á nuestras facultades nacionales, un privilegio de nuestra existencia nacional, una regala nacional.

Los recursos de fuerza, aunque parezca una paradoja, son una emanacion del patronato, son actos de verdadera proteccion, de verdadera tutela.

Y este es otro concepto que es necesario dejar bien establecido, para no hacer una confusion inconveniente de ideas.

Los jueces civiles conocen de los recursos de fuerza como medio de tutelar la condicion de los ciudadanos, como un medio de protegerlos.

Y es por esto que los tratadistas sostienen, entre ellos muy notables tratadistas patrios y tratadistas españoles, que cuando los jueces civiles conocen de los recursos de fuerza, no ejercen acto de dominio, ni acto de jurisdiccion, sino acto de tutela, acto de superintendencia. Consideracion muy importante, porque ella excluye tambien el concepto equivoco de que los recursos de fuerza atacan la independencia de la Iglesia, la independencia de sus tribunales.

Los recursos de fuerza no son entónces sino una emanacion, una derivacion del patronato. Son tambien acto de proteccion, acto de tutelaje sobre la vida de los ciudadanos, que, aún llamándose católicos, son, sin embargo, habitantes y ciudadanos dignos de la proteccion, en todos los casos, de los jueces del país.

Señor presidente:

Sancionando esta ley tal como la presenta la comision, hacemos simplemente un acto público consecuente con nuestras tradiciones nacionales y con las disposiciones de la constitucion, que prescriben al congreso arreglar el ejercicio del patronato. Este es un arreglo del ejercicio del patronato en lo relativo á los recursos de fuerza.

Precisamente arreglamos que estos recur-

sos sean conocidos por la cámara de apelaciones en lo civil, en lugar de serlo por otro juez.

Sancionando esta ley hacemos tambien acto esencialmente constitucional, en cuanto proclamamos y confirmamos el ejercicio eficaz de las garantías que la constitucion acuerda á todos los habitantes, sin distincion alguna, sea que pertenezcan á la comunión católica, sea que pertenezcan á las comuniones disidentes.

En fin, sancionando esta ley tal como se nos presenta, hacemos acto cristiano, verdaderamente cristiano: armonizamos la constitucion y nuestros actos legislativos con la palabra de Cristo: Dad al César lo que es del César.

He dicho.

Sr. Goyena—Pido la palabra.

Señor presidente:

Ensayaré una réplica al discurso que acabo de oír, no proponiéndome hacerla con gran estension, por las circunstancias en que se encuentra el debate, muy prolongado ya.

Espero tocar, sin embargo, todos los puntos fundamentales de ese discurso, y aún algunas observaciones del anterior, pronunciado por el señor ministro, en la parte en que no haya sido refutado ya por mi honorable colega el señor diputado por Buenos Aires.

Yo entiendo, señor presidente, que el discurso que acaba de pronunciar el señor diputado por Entre-Ríos puede dividirse de esta manera: 1.º consideraciones sobre el carácter constitucional y legal de la cláusula que se discute; en seguida, el exámen jurídico mismo del recurso de fuerza, en los tres casos en que los prácticos lo presentan; después, consideraciones generales sobre el Estado en sus relaciones con la Iglesia; y finalmente, la pretendida demostracion de que el recurso de fuerza está necesariamente incluido en las causas de patronato.

Dividido así el discurso del señor diputado, me parece que el proceso de la réplica puede facilitar la inteligencia de las observaciones que haré, dejándolas mas perceptibles al espíritu de mis honorables colegas.

Yo no comprendo bien como el señor diputado por Entre-Ríos haya pretendido deducir una serie de consideraciones pertinentes y favorables al propósito en que se ha estendido, tomando precisamente la faz constitucional de este asunto.

El congreso argentino no puede legislar sino en uno de estos dos caracteres: ó como poder legislativo de la nacion, cuando legisla para todo su territorio; ó como legislatura especial de la capital, que no tiene otra legislatura por nuestra organizacion política,

que tiene en el congreso el cuerpo que para las leyes locales tiene cada una de las provincias que forman la república argentina.

Pues, bien; bajo cualquiera de estos dos respectos, no encuentro pertinentes las observaciones de mi honorable colega por la provincia de Entre-Ríos.

Si es como congreso nacional, legislando bajo el criterio de la constitucion, moviéndose, como no puede hacerlo de otro modo, dentro de la órbita que la ley fundamental establece para él, basta tener en cuenta la reforma del año 60, para que se comprenda inmediatamente que no puede hacer revivir, en manera alguna, un recurso que ha sido borrado de la constitucion, á mocion del jurisconsulto mas notable que hasta ahora haya producido la república argentina, el doctor Velez Sarsfield.

Y hablo aquí de una manera asertiva, porque encuentro algo mas, para apoyar mi opinion en la del doctor Velez relativamente á los recursos de fuerza, que *El Redactor* que se publicó anexo al volumen que contiene los debates de la convencion.

Hay en el cuerpo mismo de este libro, un pequeño discurso del doctor Velez, que especialmente se refiere á los recursos de fuerza, y en el que propone su supresion, diciendo clara y terminantemente: «La nacion, los poderes federales, nada tienen que ver con estos recursos; el congreso no legislará sobre ellos.»

Del conjunto de atribuciones que se daba al poder judicial de la nacion, ha quedado excluido el recurso de fuerza.

Ahora se dirá: ¿el congreso, legislando para la capital, puesto que da una ley de organizacion para sus tribunales, puede considerar estos recursos?

Y entendía yo que la observacion que hacia el señor diputado por Entre-Ríos, importaba decir: la cámara no puede tomar otra resolucion á este respecto, que dejar como una cosa inconvencional, lo que encuentre en las disposiciones legislativas vijentes sobre la materia.

Pero, señor, cuando el congreso legisla en un caso como el que estamos considerando, cuando abraza todas las materias que comprende una ley de organizacion de los tribunales, es evidente que, si puede establecer el recurso, que si puede incluirlo entre las atribuciones de la cámara de apelaciones de la capital, puede tambien resolver en contra, suprimiéndolo.

El que tiene facultad para establecer, tiene facultad para suprimir: *Ejus est tollere ejus est condere*, como se dice en la escuela de derecho.

Bien; pero el señor diputado iba mas adelante, y estudiando cada uno de los recursos

pretendía establecer que en ninguno de ellos se afecta la independencia de la Iglesia, que en ninguno de ellos se vulnera los derechos que le pertenecen como á una sociedad perfecta é independiente del Estado.

Yo creo que la demostracion no ha sido concluyente, y espero, analizando en seguida del señor diputado las mismas situaciones jurídicas á que él se ha referido, establecer que en todos y cada uno de esos casos de recurso de fuerza se vulnera los derechos de la Iglesia, se hace ilusoria, se hace negatoria la existencia de estos tribunales en la plenitud de facultades, con la seriedad y eficacia que sus resoluciones deben tener.

Si se trata del recurso de conocer, tiene que convenir el señor diputado por Entre-Rios, en que el juez civil trae de los tribunales eclesiásticos el asunto, é impide que ejerzan sus funciones.

Pero, señor! ¿Cómo puede entenderse que no haya vulneracion de los derechos de la Iglesia, que no haya afectacion de las funciones de los tribunales eclesiásticos, cuando se toma un asunto del que está conociendo el juez y se le quita la facultad de resolverlo?

Cuando un juez que está conociendo de un asunto recibe la intervencion de un poder extraño y se le quita la facultad de resolver en ese asunto, de pronunciar sentencia, ¿hay acaso diferencia entre eso y el que el tribunal extraño anule la sentencia que el tribunal eclesiástico haya dado? ¿Qué diferencia hay entre tomar la sentencia ya pronunciada é impedir su realizacion, é impedir de antemano que la sentencia misma se produzca?

Hay ciertos puntos que cuando se afectan, se afectan necesariamente en todas las consecuencias que afluyen de ellos; é impedir á un juez que dicte su sentencia, vale tanto evidentemente como hacer ineficaz, como hacer nula su sentencia.

Se dice que cuando se trata del recurso en el modo de proceder, tampoco conoce el juez civil en el fondo del asunto, y que por lo mismo no afecta el derecho de la Iglesia.

Todos los que somos abogados, todos los que tenemos alguna versacion en los asuntos forenses, sabemos perfectamente que la manera de llevar el procedimiento influye necesaria, inevitablemente, en la resolucion de la causa; que producida la prueba en una ó en otra manera, que dirigidos los trámites legales en un rumbo ó en otro, resultará comprobado tal ó cual hecho, resultará el fallo en un sentido ó en otro. Influir en el procedimiento es influir en el resultado. El procedimiento es el proceso, es el camino que se

hija al asunto y por el cual se le impulsa; y es evidente que si la direccion se cambia, el resultado se cambia tambien; y el resultado es el fallo, el resultado es la sentencia. Luego, llegamos al mismo fin en este caso que en el anterior.

Vamos por último al caso en que el recurso se llama de no otorgar.

¿Y puede escapar á la penetracion mas vulgar, que otorgando el recurso de apelacion, que haciendo que él se produzca cuando un juez eclesiástico lo niega, se cambia el fondo del asunto, se cambia la situacion de los litigantes y el resultado del proceso?

Enunciar, aquí, es probar; enunciar es demostrar.

Luego, en cualquiera de los tres casos que se considere la intervencion del juez civil, ella hace negatorias las resoluciones del tribunal eclesiástico.

No abundaré á este respecto en las razones que se dieron cuando se trató por primera vez la materia, para mostrar que de otros puntos de vista esta solucion de los recursos de fuerza es inaceptable tambien ante la sana doctrina.

Hacía otra observacion el señor diputado por Entre-Rios. Decia: todavía consentiría que fuera pertinente que la cámara se ocupara en tratar del recurso de fuerza para suprimirlo, como se propone, si estuviéramos estudiando una ley de procedimientos.

Pero, señor! Hago tambien un llamado á los abogados que se sientan en la cámara para que ellos juzguen si es posible trazar una línea divisoria, de tal manera que se diga: Esto pertenece á la ley de procedimientos; esto otro pertenece á la ley de organizacion de los tribunales; lo uno está separado perfecta y claramente de lo otro.

Absolutamente, no, señor presidente. Y basta lo que vá sancionado de la ley para que se convenza cualquiera de que no puede haber una ley de organizacion de los tribunales en que no se resuelvan puntos de procedimientos; que no hay una ley de procedimientos que no esté correlacionada con la de organizacion de los tribunales, de tal manera que una ley de procedimientos puede ser inteligible y aceptable habiendo cierta organizacion judicial y ser inaceptable si hay otra organizacion.

¿Pero de qué nos hemos ocupado en los dias anteriores? ¿Qué es lo que ha tenido la cámara á su consideracion sino las apelaciones, si se conceden ó nó; si el auto interlocutorio ha de ser apelable si no causa gravámen irreparable; ante quien han de ir los litigantes, en qué condiciones han de ser fallados los pleitos, cuál es la jurisdiccion, el alcance de las atribuciones de las diver-

sas magistraturas que componen la organizacion judicial? ¿Es este ó no procedimiento?

Encontramos en la misma ley un artículo que me sugirió esta pregunta á los señores de la comision: «¿Cómo han de votar los jueces? ¿han de distinguir las cuestiones de hecho y de derecho?» y me contestaban: «No lo ponemos aquí porque está en la ley de procedimientos.» Y, á la verdad, lo mismo puede estar en una que en otra: ley de procedimientos y ley de organizacion de los tribunales forman un todo orgánico. Luego, si el señor diputado por Entre Rios entendía que era pertinente tratar de los recursos de fuerza, cuando se considerara la ley de procedimientos, tiene forzosamente que convenir que no es impertinente tratarlos, cuando se considera la ley de organizacion de los tribunales.

El congreso en este caso, como legislatura de la capital puede hacer lo que podría hacer tambien, lo que en mi concepto debería hacer la legislatura de San Juan, la de Buenos Aires, si organizan sus tribunales y encuentran en la ley una cláusula como esta. Si han podido sancionarla, si han podido reconocerla, pueden perfectamente suprimirla.

Pero entro en un orden de consideraciones mas amplio, siguiendo tambien allí al señor diputado por Entre-Rios.

Señor: vemos aparecer á cada momento, ya en el discurso del señor ministro, ya en el que acaba de escuchar la honorable cámara, cierto concepto del Estado que pretende vincularse necesariamente á la única manera legítima de entender el patriotismo, como si todos aquellos que no arribáramos á las mismas consecuencias de los que quieren mantener estos recursos fuéramos, sino antipatriotas, por lo ménos tibios é insensibles á los sentimientos que vibran en todo corazon bien puesto.

No! señor presidente. Se puede ser perfectamente patriota y no tener del Estado ese concepto bajo el cual lo vemos aparecer con frecuencia; concepto panteístico, absorbente, tuitivo hasta la exageracion, en tal manera que alguna vez podremos decir (y ha llegado ya el momento de decir): ¡Ojalá no nos protegieran tanto!

Si! señor presidente: la situacion en que el Estado argentino está colocado respecto de la Iglesia católica, que es una sociedad espiritual y visible á la vez y de la que forma parte la unanimidad moral, la inmensa mayoría de los argentinos, no es la que ha bosquejado el señor diputado por Entre-Rios.

Si! somos católicos argentinos! Y cuando se toma está afirmacion del punto de vista de la conciencia, yo, á mi vez dirijo la pregunta, hecha por él, en sentido inverso, al

señor diputado, y digo: ¿Coloca los intereses del alma, los intereses que se refieren á la eternidad sobre los cambios del tiempo, las vicisitudes de las pasiones y los mezquinos intereses de los partidos?

No! Admitida la Iglesia católica no como una sociedad anónima, no como uno de esos cultos que protege indistintamente la Francia, segun decía el señor diputado, agregando que era cuestion de número; no nos encontramos en presencia de una corporacion, de una *universitas*, como decía el derecho romano, nos encontramos con una institucion perfectamente establecida, con la amplitud de facultades indispensable para llenar su mision apostólica. No podemos reducirla al caso de una sociedad anónima, sin tener el mas grande desprecio por los intereses de la conciencia al traves de la historia y de las instituciones jurídicas.

Nó! ha sido admitida la Iglesia católica como una gran institucion social. Y nuestra constitucion, que se quiere interpretar de una manera materialista, panteista, como si el hombre no tuviera mas que los intereses esternos, respeta á esa Iglesia que representa los intereses mas nobles de la conciencia argentina en la inmensa mayoría de los que forman la nacion!

Esa constitucion que contiene una cláusula con arreglo á la cual el primero de nuestros magistrados está en el dilema forzoso de ser católico ó perjurio,—no consiste que estas cuestiones sean tratadas de un punto de vista anti-católico ó materialista.

Yo digo entónces: no tenemos la pretension de suprimir el Estado. ¿Ni cómo lo suprimiríamos? ¿No nos vivimos en él? ¿No somos argentinos tambien? ¿No contribuimos á la formacion de las leyes? ¿No las respetamos? ¿No damos ejemplo de obsecuencia á sus preceptos?

¿Qué es lo que pretendemos? Que se respete nuestra concienal. No pedimos otra cosa, al tratar de los recursos de fuerza: que se respeten los tribunales eclesiásticos, objeto legítimo de nuestra consideracion y á los cuales se debe proteccion asídúa en el ejercicio de sus funciones.

Esas relaciones de la Iglesia y del Estado, decía muy sencillamente el señor diputado por Entre Rios, deben ser resueltas, en último caso, por el Estado: nada hay superior á él.

Nó, señor; el arreglo se efectúa de otro modo; está indicado ya, la historia lo muestra: por concordias entre ambas potestades.

Desaparezca el espíritu de hostilidad; desaparezca ese espíritu de soberbia absorbente que impide ver nada mas allá del mundo material; sepamos que estamos vinculados á intereses de otro orden; inspirémosnos en un

espíritu sano, y la solución se tendrá, por concordias, por arreglos, reconociendo á la Iglesia lo que ella tiene necesariamente, por su mision divina.

Pero me llama mucho la atención que, precisamente, cuando se trata de recursos que han sido llamados *de fuerza*, en odio á la Iglesia, empleando una palabra injuriosa, que solo tendría aplicación en materia penal, porque fuerza es daño, hecho torticidamente y del cual el hombre no se puede amparar, según la ley de partidas—me llama mucho la atención que se trate á los tribunales eclesiásticos como á criminales, como á bandidos. Se ha dicho que se han establecido recursos, para defender á los ciudadanos, para librarlos de la iniquidad; eso se ha dicho en el fondo á pesar de la cultura del señor diputado por Entre-Ríos y de las formas que usó el señor ministro; como si el hecho de no admitir el recurso de fuerza equivaliera á dejar á la sociedad bajo el peso de grandes calamidades.

¿Y qué remedio propone para ese mal imaginario? Establecer que el juez civil es competente en la materia civil y en la eclesiástica; es decir, establecer una monstruosidad, poner la fuerza en lugar de la justicia.

No hay lógica en esto, señor presidente.

Llego, por fin, á la parte en que el señor diputado por Entre-Ríos decía: constitucionalmente, estamos obligados á mantener el recurso de fuerza; no podemos abolirlo, es una cosa contenida en el patronato.

Yo me refiero á los conocimientos elementales en esta materia relativa á las causas de patronato y de recursos de fuerza, y abro cualquiera de los autores españoles que la tratan. Los regalistas mas avanzados, el conde de la Cañada, Covarrubias, cualquiera de los que admiten y sostienen estos recursos, hacen distinciones fundamentales.

El recurso de fuerza se refiere á derechos privados; el recurso de fuerza procede ó tiene aplicación en juicios contenciosos.

El recurso de protección, las causas de patronato, pertenecen á otra jurisdicción, á otro orden, en la doctrina misma de los regalistas.

Las audiencias, los tribunales ordinarios conocían de los recursos de fuerza; las otras causas se llevaban al consejo de Castilla y hasta al mismo soberano.

En las cuestiones de patronato está afectado un interés general.

En los recursos de fuerza el derecho está comprometido en la forma de una causa contenciosa que vá ante el tribunal eclesiástico.

Pero se dirá: ¿á esto se reduce el recurso de fuerza? ¿Si es solamente un derecho de os individuos que pleitean ó tienen acción

ante el juez eclesiástico, por qué se dá tanta magnitud á esta cuestión?

Es que bajo el punto de vista de la Iglesia, la intromisión del poder civil en causas que afectan la conciencia, que afectan su independencia, los recursos de fuerza son gravísimos como cualquiera otra invasión de sus derechos y de su soberanía.

El señor ministro, sin que yo me dé bien cuenta hasta ahora de por qué generalizaba tanto, del punto de vista histórico, las observaciones con que principiaba su discurso, pretendió hacer una especie de proceso de la Iglesia, que ha sido brillantemente refutado por mi honorable colega por Buenos Aires. Pero yo no dejaré la palabra sin volver sobre esa faz del discurso del señor ministro. Yo no podría tolerar, yo no podría silenciar, teniendo una banca en esta cámara, que se haya espresado con tanta ligereza, con tanta inconsideración, sin el respeto que un ministro del Culto,—nó de los cultos,—debe profesar á la religion católica.

«La Iglesia tuvo un gran poder». «La Iglesia, con un Papa, trazó una línea divisoria para la América». «La Iglesia estimuló las cruzadas».

¿Qué hay en estos acontecimientos? Tuvo un gran poder! ¿Pero cómo lo usó? Para bien de la humanidad, para la civilización del mundo.

La Iglesia estimuló las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? La historia lo dice: un levantamiento de los pueblos, en nombre de un interés noble; no en nombre de un interés material, sino en nombre de un interés elevado! Tránsito, manifestación de los pueblos, romería grandiosa, en que grandes intereses sociales se movieron, produciendo importantes reformas para el progreso del mundo!

«Trazó el papa una línea divisoria de la América, diciendo: lo que queda de un lado es de los portugueses, lo que queda del otro es de los españoles.»

¿Cómo negar el derecho, la justicia de semejante resolución?

¿Quiénes eran los grandes descubridores? ¿Quiénes habían tenido la intuición de las grandes ventajas que ofrecería á la humanidad el descubrimiento del Nuevo Mundo?

¿Y á qué nación pertenecía un Fernando de Magallanes, un Solís? ¿Bajo qué banderas se cruzaron en mares desconocidos los que terminaron la empresa del imortal Colón, sino bajo las banderas de España y Portugal?

¿Qué naciones sino ellas tenían derecho á imperar en los inmensos territorios recién descubiertos? Y cómo no había el papa de asegurar para la civilización católica el Nue-

vo Mundo, hallado por la intuición genial de un hijo de la Iglesia?

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—No es á mí á quien contesta. Es al eminente católico, apostólico romano doctor Velez Sarsfield . . .

Sr. Goyena—Que suprimió los recursos de fuerza. ¡Mítele en todo el señor Ministro!

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Permítame. También puedo decir algo al respecto.

¿Qué dice respecto al punto de que tratamos?

Tiró una meridiana al través del Océano, dando á los portugueses una parte y á los españoles otra, causa de la despoblación de la América, porque la Europa tenía que haber con Sud-América y la habría poblado como pobló la América del Norte.

Sr. Goyena—La América no habría sido tan pronta católica.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—En cuanto á las cruzadas, el señor diputado ha leído la historia en otra forma de la que yo lo he hecho. Las cruzadas han sido la causa del atraso y de la despoblación de la Europa en un tiempo.

Sr. Goyena—De grandes movimientos sociales!

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿Y qué resultó entonces?

Ordenes ridículas de caballería!

Sr. Goyena—Yo quisiera que el señor ministro se persuadiese de esto: que la humanidad no se mueve por un arranque generoso sin dejar un rastro fecundo sobre la tierra, y eso ha sucedido entonces.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—¿Qué resultó de la guerra iniciada por España contra los moros? El atraso!

Sr. Goyena—¿Sabe el señor ministro lo que dice la estadística actual, por haber España desterrado á los moros? Que en nin-

guna nación europea la estadística criminal es tan baja como en España, pueblo católico y por eso tan moral.

Sr. Ministro de J. C. é I. P.—Dirán lo que quieran las estadísticas que el señor diputado conoce lo que dice la historia es que la decadencia de España comenzó con la guerra contra los moros.

Sr. Goyena—La estadística á que me refiero es hecha por liberales.

Quedan contestadas las objeciones; y me refiero al señor ministro en esta observación final, porque es él quien me ha parecido acentuar más esta consideración sintética que, para mí, hace inaceptable todo su discurso: a saber, el punto de vista materialista, estrecho, que él toma para apreciar todas estas cuestiones.

En medio de las ideas que van haciendo descender el nivel humano, á pesar del incremento de la civilización material y del espectáculo que nos hacen presenciar los poderes de la tierra; cuando las rentas de las naciones mas poderosas y mas ilustradas en vez de servir á la obra del adelanto están empleadas en mantener grandes trenes de guerra y ejércitos permanentes que chupan la sangre y el sudor de los pueblos, el único poder que sin esos medios se mantiene en el mundo, que no esparce sino rayos de luz y de esperanza para la humanidad, es el Papado, es la Iglesia, cuyo espíritu sigo y al que espero en Dios permanecer fiel en todos los días de mi vida!

He dicho.

— Se vota el inciso 2º del artículo en discusión y es aprobado por 48 votos contra 11.

Sr. Presidente—Siendo la hora avanzada, invito á la cámara á levantar la sesión.

—Así se hace, siendo las 6 y 5 p. m.